

INTRODUCCION

1. El análisis de la coyuntura política-económica implica una serie de riesgos y restricciones que parecen explicar la aversión de algunos grupos por los estudios coyunturales. Entre tales riesgos y restricciones se encuentran:

- 1) La circunstancia de que el trabajo orientado hacia los eventos corrientes no puede detenerse a presentar cuidadosamente las elaboraciones abstractas en que se apoya precisamente la interpretación coyuntural. Resulta entonces necesario asumir, sin que medie discusión previa suficiente, el entendimiento de caracterizaciones generales tales como las referentes al Estado capitalista en la fase monopólica del capital y en formaciones económicamente subordinadas o las relativas a las necesidades específicas del capital avanzado en este estadio de su desarrollo;
- 2) El hecho de que la perspectiva coyuntural requiere de un mayor esfuerzo integrador que el requerido por el trabajo teórico general (frecuentemente llamado "abstracto"), sin que esto signifique que la última modalidad citada se sitúe fuera del campo del materialismo histórico. Simplemente, hay que reconocer que el análisis particular de un momento social no tiene la misma libertad de acción de la teoría general. Al trabajo abstracto, por el contrario, le es dado seleccionar, sin perder el punto de vista integrador o totalizante, ciertos conjuntos de relaciones que gozan de una especificidad propia y cuyos contornos son definidos intelectualmente;
- 3) El estudio materialista del presente, a diferencia, por ejemplo, de las pretensiones de los análisis coyunturales

positivistas, abandona desde un comienzo toda pretensión de infalibilidad y de conformidad con "la realidad". Y esto no solamente por la separación fundamental entre el método materialista y el empirista sino también por el hecho de que, tratándose del examen circunstancial más que de otro tipo de estudios, la misma producción teórica entra de inmediato a alterar la dinámica de las relaciones sociales analizadas.

Con todo, hay momentos en que resulta imperativo participar en el análisis coyuntural. Son momentos de reajustes considerables en la lucha por el poder y en la estructura de dominación. No se trata solamente de procesos en los cuales tambalea la dominación misma de las clases que extorsionan el excedente sino también de enfrentamientos que pueden llegar a determinar reajustes al interior de la armazón constituida por el conjunto de las clases dominantes (bloque en el poder) y, a través de ellos, de nuevas estrategias de subordinación de las clases trabajadoras. El examen de si se están viviendo o no procesos de tal naturaleza en Colombia y las implicaciones que ellos tendrían para el control y para las posibilidades de lucha de las clases dominadas constituyen el objeto de este ensayo. Se aspira, pues, a suministrar un punto de referencia para las luchas inmediatas de las clases populares.

Además, este texto introducirá, en cuanto sea posible hacerlo dentro de los límites de su objeto, las consideraciones teóricas que subyacen el análisis. De esta manera se podrá juzgar, en un futuro, la adecuación de las tesis aquí presentadas — y de las elaboraciones teóricas en que se apoyan — según el único criterio social válido para evaluarlas: Su valor histórico relativo en una sociedad dividida en clases.

2. El gobierno del Presidente López ha conocido tres mo-

mentos de supuesta o real inestabilidad: Primeramente cuando a comienzos del año 1975, el fantasma golpista se personificaba en el General Alvaro Valencia Tovar y el Presidente decidió llamarlo a calificar servicios; posteriormente cuando, con ocasión de las elecciones "de mitaca" de Abril del 76, la izquierda electora se anticipó a anunciar un éxito que nunca alcanzó y numerosos grupos de izquierda y de derecha pensaron que el conjunto de las clases dominantes optaría por el régimen militar; finalmente, por los meses de Marzo y Abril del presente año, vuelve a atalayarse y discutirse la posibilidad de la implantación de un régimen militar en nuestro país.

Como es bien sabido, los dos primeros presagios de golpe de estado nunca vieron la luz. Entonces como ahora los altos mandos militares se apresuraron a desvirtuar el peligro que asechaba al gobierno y a los espíritus democráticos y que amagaba con modificar las reglas institucionales de las reivindicaciones obreras (1). Pero ahora, al igual que entonces, las declaraciones de las fuerzas armadas no constituyen más que otro ingrediente del mundo de las apariencias que resulta necesario encuadrar e interpretar dentro del conjunto de las relaciones sociales, éstas sí (y no el voluntarismo soberano de las fuerzas represivas ni de algunos de sus jefes) determinantes de las formas del Estado y de la estabilidad del ré-

(1) Valencia Tovar ha rechazado reiteradamente toda intención golpista de su parte y se ha adelantado, en sus editoriales de *El Tiempo*, a negar tales propósitos en sus antiguos compañeros y subalternos en el momento actual. En 1976 correspondió al Ministro de Defensa ratificar la lealtad de las fuerzas armadas a las instituciones democráticas. En los últimos días el turno ha sido para el General Camacho Leyva, quien ha venido insistiendo en las tradiciones democráticas colombianas (ver apartes de su entrevista para la BBC de Londres en *La República*, 3 de Mayo, 1977. También su entrevista dentro del capítulo "La pelea es peleando", el Sábado 30 de Abril por la Primera Cadena de Televisión).

gimen. Con mayor razón si se tiene en cuenta que los golpes de Estado no se anuncian sino que se efectúan.

3. Las páginas que siguen a continuación buscarán interpretar la actual inestabilidad del gobierno y del régimen institucional. El Capítulo Primero expondrá sumariamente algunas interpretaciones que se han dado de la crisis política experimentada por las instituciones democrático-burguesas; el Capítulo Segundo examinará los síntomas y los determinantes de la inestabilidad; el Capítulo Tercero considerará las soluciones al alcance del gobierno y del bloque; el Capítulo Cuarto y último analizará las posibilidades obreras y populares dentro de esta coyuntura.

1. INTERPRETACIONES CORRIENTES DEL TAMBALEO GUBERNAMENTAL

Las formulaciones que siguen a continuación no han sido presentadas en forma ordenada ni sistemática por sus respectivos voceros. Tampoco se trata de hipótesis explorativas excluyentes entre sí. Simplemente constituyen parte del múltiple y contradictorio dispositivo estratégico con que cuentan los aparatos ideológicos estatales y no estatales para mantener los principios de legitimidad del régimen atacados por la crisis política actual. Como tales, son formulados de manera dispersa e inconsecuente por los burócratas, los parlamentarios, los partidos políticos y los órganos eclesiásticos y son ampliamente difundidos por los medios de comunicación y, en general, por los aparatos ideológicos ya sean estatales o particulares.

1. EXPLICACIONES QUE SOBREALORAN LA DESCOMPOSICION AL INTERIOR DE LA CLASE POLITICA

La interpretación de la crisis, que ha sido preferida por el Estado y por los partidos políticos, versa sobre las relaciones de los partidos entre sí y de estas agrupaciones políticas con el gobierno.

Una primera interpretación, frecuentemente formulada por los editoriales de prensa, sostiene que la llamada clase política (por cuanto es una categoría social y no una clase en sentido estricto) no ha madurado lo suficiente como para haber superado el personalismo electorero, las ambiciones

burocráticas, las luchas por el botín público, los rencores, el odio individualista, la carencia de definiciones ideológicas y de armónicos programas de partido, el recurso a la violencia, etc. De acuerdo con esta tesis, el aspecto dominante de la crisis actual sería la incapacidad de la clase política para derrotar lo que se ha denominado el cretinismo parlamentario a pesar de que, en su entendimiento, el Frente Nacional del que estamos saliendo, habría estado precisamente destinado a eliminar los combates auto-destructivos de los partidos burgueses (1).

Una segunda modalidad hermenéutica parece situarse en contraposición con la anterior. La explicación de la crisis, lejos de encontrarse en el retoño del sectarismo partidista, previo al Frente Nacional, reside, por el contrario, en las limitaciones que el prolongado desmonte del acuerdo bipartidista ha impuesto sobre el libre accionar de los partidos, particularmente sobre el partido que ocupa la Presidencia. Así, López Michelsen ha venido sosteniendo, con insistencia, que la naturaleza híbrida e indefinida de sus programas económicos y sociales y el estancamiento o reversión de los mismos constituyen el resultado necesario de un gobierno liberal que se ha visto forzado a compartir "el poder" con el partido conservador. La impotencia programática, la incapacidad para cohesionar a las clases dominantes y para vincular al pueblo entero a las políticas estatales, la brecha entre los anuncios socialstoides de la campaña electoral y las realizaciones efectivas del presente cuatrenio presidencial, todo esto se debería a la circunstancia de que el Partido Liberal hubiera llegado al gobierno pero no "al poder", de que la Constitución impusiera un gobierno compartido y no un gobierno de partido (2).

En el mismo sentido, Gómez Hurtado ha venido atribuyendo las causas de la crisis a las posiciones liberales con las

cuales se ha visto obligado a transigir para sacar a flote la coalición gubernamental. La ausencia de una política represiva eficiente en materia subversiva y criminal, las políticas libertarias y aún inquierdizantes en las universidades y la falta de estímulos al capital so pretexto de implantar un *laissez-faire* que solo tolera intervenciones fiscalistas (del Ministro Botero) y monetaristas (del Ministro Espinosa), constituyen las fuentes del malestar social y económica del momento (3).

El sector conservador orientado por Gómez, de manera oportunista, se auto-absuelve de toda responsabilidad en la crisis del régimen y se auto-postula como alternativa, capaz de armonizar los intereses económicos de las clases dominantes en base al "desarrollismo" y competente para restablecer la paz y el orden turbados por los movimientos y las acciones populares. Al mismo tiempo se declara mártir de las reglas de juego constitucionales y devoto servidor de las instituciones democrático-burguesas alrededor de las cuales se construye la idea de la unidad nacional en la formación colombiana de la actualidad:

"La Constitución prescribe que el presidente debe compartir igualmente el gobierno con el otro partido tradicional, en este caso el conservador ...

"La razón primordial para que el conservatismo adoptara esa actitud (de participación en el gobierno) fue la preservación de las instituciones democráticas, puesto que se suponía que los dos partidos tradicionales tenían ideas comunes o, por lo menos, congruentes sobre la organización republicana del país ..." (4).

A pesar de la aparente oposición diametral entre las dos comprensiones que acaban de ser expuestas, una y otra coinciden en imputar los determinantes de la inestabilidad insti-

tucional a la organización del régimen político, particularmente en lo relativo al comportamiento de los directivos de los partidos, a las relaciones entre éstos y a la representación partidista en el gobierno.

Son múltiples las ventajas de esta raíz explicativa común desde el punto de vista de la exégesis del Estado capitalista y de su habilidad para coordinar los contrapuestos intereses de las clases dominantes:

1) Este entendimiento se concentra en las reglas del juego gobierno-partidos políticos. Como tal, se remite a: (a) las diferencias estratégicas que cada partido plantea al bloque de clases dominantes; (b) al comportamiento transitoriamente inmaduro de los dirigentes políticos. Se observa, entonces, que se preserva la capacidad del Estado capitalista "normal" o "democrático" para solucionar la crisis y mantener los principios de unidad nacional (y en ellos la desorganización y dominación de las clases populares, según se verá más adelante).

De hecho, las medicinas que estaría recetando este conjunto de tesis serían: (a) la alternación de los partidos y de las corrientes de los partidos en la Presidencia para sustituir así una corriente que resultó inepta para su compromiso histórico; (b) modificar las normas constitucionales con miras a reimplantar definitivamente la libre competencia entre los partidos, o, por el contrario, para conciliar nuevamente sus posiciones mediante un retorno a las pautas frentenacionalistas; (c) educar a la clase política actual en las buenas maneras y en el espíritu universalista que debe aparentar todo dirigente político para así impulsar la idea de unidad nacional propia de las sociedades capitalistas. Como se ve, ninguna de estas soluciones entraría a cuestionar el Estado o la forma democrática del mismo.

2) Como se trata de hipótesis focalizadas en las conductas burocráticas sin acudir, siquiera tangencialmente, a la conexión entre las élites estatales-partidistas y las clases dominantes dentro de la formación, los enfrentamientos al interior del bloque desaparecen y son opacados por la ya conocida imagen del Estado unitario representante del bien común general (5). Esta ilusión idílica conduce, en este caso, a desconocer la lucha económica subyacente en la crisis actual y preservar la unidad del bloque mediante la relegación de sus contradicciones internas a la trastienda de los corrillos sociales y los salones de las directivas gremiales. Se posterga la descomposición del bloque bajo la perspectiva de que los remedios político-administrativos puedan reintegrarlo armónicamente. Se niega la crisis política y se la sustituye por diversas interpretaciones de carácter fundamentalmente organizativo-institucional.

En síntesis, estas interpretaciones vulgares salvan los dos principios de unidad del Estado: preservan la legitimidad política de la formación, esto es, la idea de la representatividad del pueblo-nación, y defienden a la organización política como lugar de estructuración del bloque en el poder.

Sin embargo, la restricción del objeto del análisis a los partidos políticos burgueses y la asimilación de la crisis actual a modalidades anteriores de barbarie y fanatismo político solo son posibles si se ocultan los específicos intereses económicos enfrentados actualmente. La comparación de la intransigencia partidista actual con el dogmatismo de las décadas del treinta, del cuarenta y del cincuenta sólo tiene validez formal. En ese entonces dos clases dominantes principales, burgueses y terratenientes, se disputaban ardorosamente la hegemonía (6) y aún la sobrevivencia. Los partidos políticos participaban activamente en la crisis de inestabilidad mediante la representación casi-exclusiva de los intereses de

una u otra clase y el equilibrio inestable entre ellas impedía la configuración de un Estado que coordinara jerárquicamente los intereses de las clases dominantes (7).

Esa explosiva situación condujo a la instauración de la dictadura militar en Colombia, en virtud de un acuerdo casi unánime de las clases en conflicto. Por razones que no es del caso considerar aquí (8) la burguesía resulta triunfante al final del interregno rojista y bajo su hegemonía se organiza el Frente Nacional. El acuerdo bipartidista constituye una aproximación al régimen de partido único, con las ventajas para la dominación y legitimación, de que mantiene la separación de los partidos y de que tolera toda suerte de disidencias, aún de izquierda.

La reforma constitucional del 68 consolida el proceso de consagración institucional de la hegemonía burguesa. Ya para 1974 el panorama partidista difiere sustancialmente del que se viviera hacia la mitad del siglo. Los iconoclastas de esta última época son ahora respetuosos caballeros, cada uno de los cuales plantea un programa fundamentalmente capitalista. En las elecciones de ese año las diferencias entre los partidos liberal y conservador son esencialmente divergencias ESTRATEGICAS sobre la mejor conducción de la expansión del capital.

Bajo el Frente Nacional las corrientes conservadoras que propugnaban preferentemente los intereses terratenientes se inclinan definitivamente ante la dominación burguesa y pasan a impulsar la integración del bloque de las clases dominantes bajo el supuesto de la hegemonía capitalista. La observación de esa coincidencia fundamental ha llevado a López a decir:

“... los dos partidos colombianos no se pueden pasar

la vida discutiendo cuál de los dos maneja mejor el sistema capitalista ... Ambos proponen manejar mejor el país ... Más aún, el reproche al partido laborista inglés es que está procediendo como nosotros los colombianos: discutiendo si consigue más recursos con el Fondo Monetario Internacional que los conservadores. Ya, en algunos países de América Latina, también los viejos partidos liberal y conservador, del Siglo XIX, están dejando de discutir quién maneja mejor el sistema capitalista o si es necesario pasarse a otro sistema ...” (9).

Que no se diga entonces que estamos frente al mismo enfrentamiento entre los partidos. Entonces como ahora hay cretinismo en la clase política, es cierto. Pero la destrucción burocrática que encontramos ahora no tiene las mismas bases económicas que en ese entonces. Aceptar lo contrario sería asumir que la estructura política-económica del país no ha cambiado en cuarenta o cincuenta años! O, alternatively, estaríamos reconociendo una gigantesca autonomía a la clase política para auto-destruirse “porque sí”.

En realidad, los orígenes materiales de la crisis presente que ha alcanzado sus manifestaciones más ostensibles al nivel de “los políticos”, deben buscarse en el interior de la clase indiscutiblemente hegemónica, en los intereses opuestos de las capas y fracciones que componen lo que genéricamente se designa como “clase capitalista”.

2. EXPLICACIONES QUE PRIVILEGIAN LA ETICA DE LOS BUROCRATAS Y DE LAS CLASES DOMINANTES

Este segundo grupo de tesis desciende del nivel institucional-organizacional postulado por las ideas anteriores y se centra en el examen ético de los personajes envueltos en el trance político. Las causas del mal residen, según este entendimiento, en la generalizada corrupción social. Todas las esferas sociales están infectadas: Los productores, los banqueros, los comerciantes, la burocracia, los trabajadores, los desempleados, los estudiantes, etc. El orden, la seguridad, la solidaridad y el esfuerzo personal se están desvaneciendo en medio del caos moral; todos los estratos sociales recorren diariamente los más diversos delitos tipificados en el Código Penal. El hedonismo individual ha desplazado los principios de unidad social. Y cómo se combate esta depravación universal? La fórmula está predeterminada por el diagnóstico: El retorno a la moral, a las buenas costumbres, a las tradiciones pacíficas, al imperio de la justicia, a la institución fundamental de la familia, a la caridad como expresión de solidaridad humana, al trabajo como medio de dignificación del hombre, al salario justo como instrumento para garantizar una vida honorable, etc.

Explicaciones de este género prevalecieron en los pasados sermones de Semana Santa:

“La situación del hombre actual es de inseguridad porque ante el poder de las mafias, claudican impotentes los poderes públicos, los acobarda y los aplasta. Es triste, porque el alcohol, la droga y la prostitución, se están volviendo cadenas irrompibles y alienantes. El pueblo está oprimido porque en la lucha por la vida apa-

recen fuerzas siniestras de explotación, carestía y afán de lucro que lo acosan ante la desesperación”.

“... los ídolos que vienen sustituyendo a Dios son figuras mitificadas por la sociedad de consumo, con su brutal filosofía de que los objetivos de la vida son la ganancia y el placer por donde se legitima todo negocio y toda satisfacción. . .” (10).

“... muchos compatriotas nuestros mueren diariamente víctimas de la inseguridad y del atropello, del desempleo y del manzanillaje partidista y del Estado engeguedo por los sofismas de distracción” (11).

“El hombre quiere que se le respete y se le suministre un medio ambiente sin privilegios ni odiosas discriminaciones, quiere una justicia y una paz verdadera” (12).

“... la situación de Colombia está agravada por la pobre respuesta que está recibiendo el país de sus conductores públicos, distraídos en atacar o defender otros intereses” (13).

“El hombre de hoy ha perdido su proyección hacia su verdadera vida, debemos luchar para impedir que la corrupción y la inmoralidad acaben con la fe cristiana y las reservas morales de nuestra sociedad. Debemos acercarnos más a Cristo para encontrar la verdadera paz” (14).

“El estado de caos moral, social, político, económico y aún religioso en que nos debatimos, se debe a la miope lucha por el poder en que están interesados los partidos políticos, con olvido y detrimento de los verdaderos valores que deben perseguir” (15).

La interpretación predominantemente ética y las recomendaciones moralistas han sido compartidas por los partidos políticos burgueses. El Espectador, después de identificarse con las observaciones de los prelados y de citar elogiosamente la encíclica Mater et Magistra, concluye:

“... entendemos la actitud de la Iglesia, que en su misión evangelizadora y sin inmiscuirse ni obstaculizar las labores del Estado, invita a los católicos para que luchen contra la corrupción y la inmoralidad, acaben con las mafias, revisen sus formas de vida, terminen excesos y liviandades, es decir, para que hagan más por su país y por ellos mismos” (16).

Pero también la izquierda ha consentido en dar al juicio moralista de las conductas burocráticas la mayor atención dentro de la inestabilidad del régimen. Ciertamente, los órganos de expresión de los partidos de izquierda no confunden todas las manifestaciones de ilegalidad en un solo escenario de descomposición ni acuden a las buenas costumbres como madero de salvación del régimen. Por el contrario, todas las organizaciones que se reclaman del marxismo tienden a separar la criminalidad de las clases populares y los llamados “delitos subversivos” de las violaciones de la ley cometidas por los mandos altos y medios del Estado y por capitalistas y terratenientes, aunque a veces se suman a los clamores de unidad nacional y exigen, ellas también, seguridad, tranquilidad, orden, legalidad, etc. (17). Además, buscan presentar la inmoralidad como connatural al modo de producción capitalista y no como pecado particular de unas pocas personas (18).

Con todo, esa doble distinción entre el entendimiento deontológico común y el de las organizaciones de izquierda no suprime enteramente el lugar común compartido por ellas.

La denuncia de las irregularidades de las clases dominantes, como componente esencial del sistema capitalista que de una u otra manera sería superado en las formaciones socialistas, no solamente carece de una explicación social y económica de la crisis sino que también — y más grave aún — permite que el reformismo burgués arrebate a las clases populares sus banderas mediante una renovación y depuración del sistema y un retorno — siempre viable — al imperio de la moral y de la pulcritud burocrática. Todavía están frescos los ejemplos del fortalecimiento democrático-burgués en los Estados Unidos, en Japón, en Holanda, en Israel y en tantos otros países afectados por los recientes escándalos de “Watergate”, Lockheed, etc.

Y es que este segundo grupo de interpretaciones de la crisis política actual no solamente participa de las ventajas del grupo anterior, desde el punto de vista de la preservación del régimen de dominación, sino que además hace aportes de su propio peculio:

- 1) Como la inculpación se centra en los funcionarios del Estado y de las organizaciones políticas, tanto los partidos como las relaciones de éstos con el Estado son preservados del contacto infeccioso de la crisis. El malestar ya no es siquiera institucional sino individual;
- 2) Se aprovecha la ocasión para revivir la ideología de las buenas costumbres y de las “sanas tradiciones sociales”, tan cara a la función religiosa integradora de la unidad nacional y, por ende, desorganizadora de las clases populares. Ciertamente, no se trata ya de rescatar las ideas de sumisión y adaptación al orden político y económico existente, como ocurría otrora, sino de robustecer la lealtad para con las instituciones vigentes mediante un coqueteo con ambos partidos políticos que se apoya en una mezcla de tesis demócra-

ta-cristianas y corporativistas al mismo tiempo, se utiliza el momento para contrarrestar las presiones presidenciales en pro de una definición más clara de la separación entre Iglesia y Estado y de una autorización pública del aborto;

3) En el caso de las acusaciones de la izquierda, ya se dijo como su centralización en el problema moral implica una serie de reivindicaciones judiciales que bien puede satisfacer el régimen político en bien de su propia purificación. Pero, además, la necesidad de emplear la "crisis de corrupción" como bandera de agitación electoral ha llevado a ponderar al Congreso como órgano de representación popular e instrumento de restricción de la autonomía presidencial y de la inmoralidad burocrática-partidista. Ciertamente, esta instrumentalización del Parlamento ha venido siempre acompañada de un reconocimiento de las limitaciones de la lucha electoral; pero no por ello deja de constituir una postulación del Órgano Legislativo como foro de superación de la epidemia del sistema, a condición de que esté integrado por auténticos representantes de las clases trabajadoras. Así, se lee en El Manifiesto, periódico central de la Unión Revolucionaria Socialista:

"... el Congreso no satisface las necesidades de democracia política experimentadas por el pueblo trabajador colombiano. La inmensa mayoría de sus actuales componentes pertenece a los dos partidos políticos tradicionales y forma una capa de políticos profesionales separados del mundo de la producción y de la vida de las capas populares; y vinculados; en cambio, por muchas ataduras, a los capitalistas y a los terratenientes. La presencia de estos personajes en el parlamento no responde a una decisión libremente adoptada por las masas sino al enajenamiento de su voluntad, permitido por el clientelismo y el uso y abuso de las mentiras refinadas" (19).

Y el análisis de Voz Proletaria sobre la descomposición gubernamental concluye:

“Al mismo tiempo, los sectores populares deben coordinarse para actuar en la campaña electoral. Es posible utilizar la lucha electoral para mejorar la unidad de la oposición democrática, **ganar posiciones en los cuerpos representativos en beneficio de los intereses populares, promover las soluciones que requiere la crisis nacional**, contribuir a detener la ofensiva revolucionaria del gobierno de López. . .” (20).

Cabe formular, cuando menos dos observaciones a esta salida parlamentaria :

a) Tanto el Ejecutivo como el Legislativo son propuestos, por la ideología dominante, como representantes de la unidad del pueblo-Nación sin que, naturalmente, ninguno de los dos desempeñe realmente esta función. Sencillamente, se trata de dos modalidades de legitimación de las instituciones políticas y de ocultación de la dominación de clase.

El Legislativo ocupaba generalmente el lugar de primacía en el estadio competitivo del capitalismo y, como tal, era el lugar donde se condensaban los enfrentamientos entre las capas y fracciones dominantes. Pero, ya en el estadio monopolista, la gran mayoría de las democracias burguesas ha operado un desplazamiento jerárquico que ha elevado al Ejecutivo al primer lugar político dentro del armazón estatal.

Este relevo en la escala no ha obedecido a una escalada parlamentaria de la izquierda que habría obligado a relegar el Parlamento a una posición secundaria. En Colombia, así como en las demás formaciones, el proceso ha estado fundamentalmente determinado por la dificultad que ha encontra-

do la fracción monopólica para imponer su hegemonía política dentro del Congreso. De allí que no pueda aceptarse la designación del Legislativo como un cuerpo susceptible de dar expresión de clase a las masas populares y menos aún que esa posibilidad se realice cuando se supriman las vinculaciones entre los congresistas y las clases dominantes o cuando se eliminen el clientelismo y las mentiras electorales.

En verdad, las clases dominantes poseen infinidad de mecanismos alternos para preservar su dominación, diferentes de los órganos representativos, cuyo carácter de clase no depende de las vinculaciones personales de los representantes y senadores y no se suprime eliminando el clientelismo ni elevando la veracidad de los candidatos. El proceso de imposición y aceptación de la dominación política es mucho más complejo, como bien lo ilustran los trabajos de Gramsci sobre la hegemonía cultural, los recientes debates sobre aparatos ideológicos, etc.

b) Por las mismas razones, no se entiende tampoco cómo se aspira a restablecer la representatividad de los cuerpos de elección popular cuando éstos ya han sido desplazados del núcleo del enfrentamiento entre las clases y la atención política ha sido trasladada a la heterogénea y contradictoria estructura del Ejecutivo. Tanto el Congreso como los partidos políticos han visto reducida su autonomía anterior y hoy operan más como satélites, que giran alrededor de la Administración o se desvían de ella. Así lo ha mostrado la presente crisis del régimen: el deterioro del Legislativo y de los partidos políticos ha seguido la ruta de la incapacidad presidencial, hasta el punto de que el fortalecimiento de uno u otros no alcanzaría a significar una solución. La terminación de la crisis, requiere, según se verá más adelante, de ajustes al interior del Ejecutivo.

3. UNA EXPLICACION QUE DESVANECE TODO SINTOMA DE CRISIS POLITICA

Finalmente, existe también un grupo de interpretaciones que atribuyen la inestabilidad presente, no ya a problemas institucionales ni a conductas inmorales sino a la insuficiencia de los conocimientos técnicos necesarios para manipular correctamente la economía. Según esta versión, la crisis actual se debe a la timidez de las medidas económicas, a la falta de herramientas adecuadas para encauzar las desbordantes tasas de inflación, al insuperable enigma creado por la abundancia de las divisas, a la insuficiencia del aparato penal del Estado, a la incompetencia de los órganos represivos, etc.

A problemas técnicos soluciones técnicas. Las recomendaciones tratan entonces sobre el justo balance entre las medidas de control monetario y de estímulo a la producción, sobre la idoneidad de las disposiciones de policía encaminadas a vigilar los precios o a combatir la inseguridad, etc.

De esta tesis participan, como puede suponerse, los profesionales, los partidos políticos y, particularmente, el gobierno mismo. Las presentaciones de los ministros sobre las distintas alternativas a su alcance, los pros y los contras de cada una y el balance final en favor de una determinada orientación corresponden a este género de representaciones. El Ministro de Hacienda discute en la televisión las opciones de la política económica y la sensatez de las vías finalmente adoptadas; el Ministro de Obras remite la incompatibilidad moral de la construcción de una carretera que valoriza los fundos de la familia presidencial a los misterios de la ingeniería y a la alambicada técnica de la evaluación social de proyectos; el Alcalde de Bogotá, no obstante la sencillez de su estilo, se vale también de consideraciones legales, urbanísticas o logís-

ticas para desalojar vendedores ambulantes, expropiar modestos habitantes o militarizar la ciudad. Los abogados discuten sobre la conveniencia de la institución del jurado y los economistas arguyen sobre los efectos de la "ventanilla siniestra". El Siglo atribuye las "nefastas" consecuencias de la reforma tributaria a la influencia de teóricos extranjeros sobre sus neófitos estudiantes colombianos y El Espectador imputa las orientaciones "leseferistas" al profesor McKinnor. Lleras Restrepo, el más erudito, ilustra la infinita gama de posibilidades que se han contemplado y ensayado en la historia del país.

Todos llaman al unísono a las musas y a los entendimientos privilegiados para que salven al país de los inescrutables destinos que nos aguardan. Es el reino de las quintaesencias del intelecto. Y, claro está, en él se hace un permanente llamado a la solidaridad nacional ante el peligro común y se apela a la colaboración sacrificada de todas las clases para que afronten con estoicismo su cuota de penalidad en tanto la ciencia saca a la Nación de su oscuro túnel:

"Ante el marco enredado de la economía, no podemos menos que formular una cordial invitación a los funcionarios gubernamentales, a los partidos políticos, a las centrales obreras, a los agricultores, a las fuerzas del país, para que procedan a colaborar y concertemos una política adecuada en relación con la inflación. Ojalá no sigamos equivocándonos porque ciertamente el ritmo de la inflación es ya desbordante y desesperante"(21).

Pero también las centrales obreras han sido seducidas por la ideología tecnicista. Las llamadas "centrales democráticas" (UTC y CTC) se han dedicado a discutir con los representantes del capital y con el Estado diversas alternativas de sujeción al alza en el costo de la vida, al tiempo que reiterada-

mente respaldan las acciones gubernamentales contra la carestía.

Plenamente imbuídas en la ideología “consumerista” (léase, lucha por restablecer un nivel anterior de salarios reales) e integradas en la Federación de Consumidores de Colombia y en la Liga Colombiana de Consumidores han venido proponiendo al gobierno soluciones tales como la creación de cooperativas, la extensión de los servicios de las Cajas de Compensación Familiar, el control de las exportaciones, la ampliación de importaciones, la intervención del mercado de drogas, el impulso a las Ligas Municipales de Consumidores, etc. Y, además, de prestar este servicio esclarecedor, hacen explícita manifestación de solidaridad con el gobierno y con las instituciones vigentes (22).

Los discursos de esta última naturaleza brindan aún mayores servicios a la ocultación del carácter de clase de la crisis y a la descomposición que ella produce:

- 1) No solamente se desconoce el carácter político del malestar sino que se niega su misma existencia y se la aprovecha para revitalizar el sentimiento de unidad nacional. Tal es, por ejemplo, el significado político principal de los llamamientos del Alcalde de Bogotá a los ciudadanos para que cada uno haga su aporte a la salvación de la ciudad.
- 2) Simultáneamente se ratifica el mito del saber carismático y oculto de los burócratas. Como se sabe, la teología del saber se entroniza en el Estado burgués del estadio monopolista como uno de los principios de legitimación de la imposición política: la sumisión de las clases trabajadoras no se justifica ahora por preceptos religiosos sino por su reverencia ante la sabiduría — técnicamente neutral — de quienes orientan las estrategias intervencionistas del sector público.

De allí la importancia de la formación del Jefe del Estado, de su representatividad de la tecnocracia, particularmente en materias económicas. Por esta razón, no es un azar el que una buena parte del debate entre los candidatos liberales a la Presidencia 1978-1982 se haya dirigido hacia la graduación de los conocimientos: Lleras recordando a todos sus lectores el **ecumenismo** de su ciencia económica y Turbay haciendo tardíos y desesperados esfuerzos por aprender el ABC de la teoría económica burguesa e impresionar con ello a sus auditorios (23). Lo que está en juego detrás de todo este folklórico debate es la capacidad de satisfacer uno de los principios de autenticación del régimen político y de desorganización de las clases dominadas.

NOTAS

- (1) El editorial de El Tiempo del 13 de Abril de 1977 ha sido lo suficientemente expresivo:

“Pero reexaminemos. . . la reactivación de la política, basada, infortunadamente, más en lo secundario que en lo primordial, y por ello mismo más peligrosamente susceptible de alterarse, a medida que la controversia preelectoral tome impulso, y la perversidad opositora colme toda posibilidad de ecuánime tolerancia. Porque el hecho mismo de que, el bloque ospino-pastranista se haya desviado por atajos de desorbitadas finalidades de ciego sectarismo e irrespetuoso empleo de las armas más bajas y mezquinas, va a provocar — y ya de ello hay anuncios — réplicas de parecidos tonos personales, en tal forma que malos usos de antaño, supuestamente superados y aun olvidados, regresen a nuestras costumbres políticas, con su dolorosa secuela de violencias y pasiones criminalmente desatadas. Consecuencia nada improbable, porque detrás de nuestros días están frescos y cercanos los que ensangrentaron y avergonzaron al país. . .” (el subrayado es nuestro, F.R.).

- (2) Ver, por ejemplo, el reportaje de la revista Causa Común a López M., en El Tiempo, 10 de Abril, 1977.
- (3) Ver los editoriales de Gómez Hurtado en El Siglo, 10 y 26 de Abril del presente año.
- (4) Apartes del editorial de A. Gómez Hurtado titulado “Cómo se estableció la colaboración conservadora” (El Siglo, 10 de Abril, 1977).
- (5) Las complejas relaciones entre burocracia e intereses económicos dominantes han sido ampliamente estudiadas, aún dentro del campo de la sociología y la ciencia política burguesa (MILLS, W. La élite del poder. México, D.F., FCE, 1957; LASWELL, H. y KAPLAN, A. Power and society, New Haven, Yale, 1950; LIPSET, S.A. y SOLARI, A.E. eds., Elites y desarrollo en América Latina, Buenos Aires, Paidós, 1967). Dentro del campo marxista han recibido reciente difusión las elaboraciones de N.R. Miliband sobre “el sistema del Estado y la élite del Estado” (El Estado en la sociedad capitalista, México, D.F. 1969) y de N.Poulantzas sobre las relaciones entre clases dominantes, clase reinante, clase mantene-

dora del Estado y burocracia (Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, 2a. Ed., México, D.F., Siglo XXI, 1970).

- (6) Hegemonía, en el sentido aquí empleado, se refiere a la dominación o primacía al interior del bloque en el poder. Esta significación difiere de la acepción gramsciana que define el modo de vida y de pensamiento, la cultura dominante en una sociedad.
- (7) Rojas, F. "El Período de la Violencia". Mimeo no publicado.
- (8) Rojas, F. "El Ascenso Burgués en el Régimen de Excepción". En mecanografía.
- (9) López Michelsen, A. Reportaje a Causa Común en El Tiempo, 10 de Abril 1977.
- (10) Apartes del sermón de Monseñor J. de J. Pimiento, citados en El Vespertino, 9 de Abril, 1977.
- (11) Apartes del sermón de Monseñor Hernando Velásquez, citados en El Vespertino, 9 de Abril, 1977.
- (12) Apartes del sermón de Monseñor F.M. Torres P. transcritos en El Vespertino, 9 de Abril, 1977.
- (13) Cita del sermón pronunciado por Monseñor L. Ramírez G. (tomada de El Vespertino, 9 de Abril, 1977).
- (14) Apartes del sermón de Monseñor S.S. Buitrago T., citados en El Vespertino, 9 de Abril de 1977.
- (15) Sermón del Padre G. Agudelo G. (El Vespertino, 9 de Abril, 1977) .
- (16) Editorial de El Espectador, 10 de Abril, 1977. También El Tiempo, El Siglo La República han participado de esta concepción mediante la orientación de todo su análisis hacia el problema del supuesto o real comportamiento inmoral o ilegal del Presidente y de algunos de sus ministros y ex-ministros (ver, por ejemplo, los editoriales de El Tiempo del 30 de Abril y del 1o. de Mayo; el editorial de El Siglo del 10 de Abril, "La indispensable base moral de la autoridad", y numerosos editoriales y "noticias" de La República.

- (17) Las agrupaciones que propenden un cambio en las estructuras políticas y económicas han mostrado una gran incapacidad para superar la hegemonía cultural en este aspecto. Carentes de un análisis de clase del crimen y del aparato represivo del delito, se unen a la censura de la inseguridad ciudadana y, por esta vía, caen en la redada legalista y en los fetiches de legitimación de la dominación política y de desorganización de las clases dominadas, es decir, en el recurso al Estado como principio de coordinación de los intereses comunes de la Nación y del pueblo.
- (18) Así, Voz Proletaria, semanario del Partido Comunista, decía en su entrega No. 924 del 7 al 13 de Abril del presente año: "Los negociados comprueban la corrupción del sistema. . ." "Quienes presumen que los altos mandos militares podrían jugar un papel de correctivo ante el panorama de ilícitos que vienen caracterizando al régimen, debían volver los ojos hacia el caso del general (r) J. Ordoñez V. . ." (pág. 1.)
- (19) El Manifiesto, No. 38, Abril 28- Mayo 12, 1977, p. 2 (el subrayado es nuestro, F.R.).
- (20) Voz Proletaria, No. 924, 7 al 13 de Abril, 1977, p. 5. (El subrayado es nuestro, F.R.).
- (21) Editorial de El Espectador, 4 de Mayo, 1977.
- (22) Ver al respecto las recomendaciones para combatir la carestía y la especulación en El Tiempo, 16 de Abril, 1977 y El Espectador, 29 de Abril, 1977.
- (23) Turbay ha tratado de eludir las armas de combate planteadas por su opositor haciendo votos de humildad mediante la afirmación de que él sí estará dispuesto a dejarse aconsejar. Con todo, el principio tecnicista se encuentra ya tan arraigado que le ha tocado enfrentar a Lleras en éste terreno, para él difícil, a través del respaldo público de conocidos profesionales y la improvisada incorporación de toda suerte de consideraciones económicas en sus discursos (Ver, por ejemplo, las sátiras de Lleras sobre un "desayuno de trabajo" de Turbay en Nueva Frontera, 4-10 de Mayo, 1977 y las insuficientes respuestas de éste en el discurso de aceptación de la candidatura, El Tiempo, 8 de Mayo, 1977).

2. BOSQUEJO DE UNA INTERPRETACION ALTERNATIVA

Los Conflictos entre las Fracciones del Capital, el Cretinismo de la Clase Política y las Luchas Urbanas

Las explicaciones expuestas en el Capítulo precedente reconocen, casi exclusivamente, la auto-destrucción de la clase política; sólo tangencialmente insinúan la incidencia de las luchas populares y de la divergencia de los intereses de las clases dominantes.

Indudablemente, el deterioro de los partidos, del gobierno y de los dirigentes políticos ha consituído el síntoma mas notorio de la crisis. No obstante, aquí se sostendrá que la inestabilidad por la que atraviesa el régimen democrático-burgués no obedece solamente a la ceguera de los líderes sino también, y principalmente, a los movimientos populares y, especialmente, a la agudización de las contradicciones al interior del bloque en el poder con ocasión de la llamada bonanza cafetera.

De acuerdo con esta elaboración, el momento crítico de la clase política se encuentra íntimamente atado a los enfrentamientos entre las clases dominantes, lo que no implica que se desconozca su autonomía y especificidad. Por el contrario, se entiende que la miopía partidista acentúa la inestabilidad y la extiende a nuevas zonas, dificultando aún más el diseño de una salida a este impasse.

Este capítulo se ocupará primeramente de los procesos de

luchas populares. A continuación se examinará sumariamente la naturaleza de la división entre las fracciones del capital y, finalmente, se estudiará la eficacia particular de la desintegración de la clase política.

1. LOS MOVIMIENTOS POPULARES

De manera sumaria, puede afirmarse que la inestabilidad política existente no ha sido determinada por una ofensiva de las clases trabajadoras. De hecho, los primeros meses de 1977 se han caracterizado, aproximadamente, por una prolongación del panorama general de movilización, estancamiento o desorganización de luchas populares observado en 1976.

Así:

1.1. Las asociaciones sindicales se encuentran no solamente a la defensiva sino que viven momentos de reflujo y desorganización. El movimiento obrero, ampliamente dividido, encuentra ahora mayores dificultades para su unificación:

a) Del lado de los sindicatos de izquierda, la proximidad de la campaña electoral y las estrategias de cada partido político para obtener una mayor cuota en las listas de candidatos o para lograr una considerable influencia de su plataforma teórica y programática dentro de la doctrina de la futura coalición popular, han movido a la figuración individual y a la competencia entre las distintas corrientes. Tal fue el panorama de desmembración contemplado en la celebración del pasado 1o. de Mayo. A esta consideración se suma la acentuación del vanguardismo intelectual en vísperas de los comicios electorales y la incapacidad de los partidos políticos de izquierda de distraer su atención hacia un análisis de

la crisis y de las posibilidades no-institucionales que ella abre a las reivindicaciones económicas y políticas de las clases dominadas.

b) Por el flanco de las centrales obreras patronales las perspectivas son aún más desoladoras. La UTC y la CTC no solamente continúan dentro de sus líneas de aburguesamiento y economicismo sino que desconocen y desvían explícitamente las oportunidades que brinda este momento de inestabilidad política y de inusitados índices de deterioro salarial. Una y otra central han venido formulando elocuentes declaraciones de adhesión y respaldo al gobierno del Presidente López, compartiendo con el Estado y con los patronos la discusión de medidas anti-inflacionarias y la reorganización del Instituto de Seguros Sociales y restringiendo sus demandas a la convocatoria del Consejo Nacional de Salarios (1). Más aún, cuando han brotado movimientos obreros autónomos que exigen concesiones en exceso de las normas legales y de los acuerdos convencionales, las mismas centrales han llamado a sus sindicatos filiales a la cordura y a establecer diálogo con el gobierno (2).

Todo esto ha llevado al gobierno a reconocer en sus aristocráticas directivas su principal fuente de apoyo durante la conmoción que lo estremece. El Ministro del Trabajo viene anunciando orgullosamente, como indicadores de la capacidad estatal para imponer la armonía nacional e integrar las clases trabajadoras, el respaldo obrero de que goza el presidente López y las garantías de paz laboral acordadas entre el gobierno y las dos centrales (3). Si bien es cierto que el temor gubernamental a toda erupción sindical ha llevado a la cartera del trabajo a solucionar las distintas huelgas o amenazas de suspensión, otorgando reivindicaciones aún en contra de la voluntad de los patronos (4), no es menos válido que el aquietamiento orientado por CTC y UTC significa

el desaprovechamiento de la mejor coyuntura reivindicativa y organizativa de los últimos años.

De otro lado, el oportunismo directivo de las dos centrales de trabajadores las ha llevado a comprometerse de antemano con los candidatos de los partidos burgueses a la presidencia y, por este conducto, con la vía electoral que, como veremos, aparece como una de las principales soluciones abiertas al bloque en el poder frente a la crisis actual.

c) Con todo, dos sectores laborales que han logrado una buena organización y se encuentran combatiendo una serie de reivindicaciones, pueden llegar a dar al traste con la pretendida "paz laboral" acarreado tras de sí toda la fuerza obrera afectada por las insólitas tasas de inflación del presente año. Se trata de la Federación de Educadores y del Comité Intersindical del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. Una y otra asociación han anunciado o decretado paros indefinidos que entrarán en rigor en fecha y hora que restan por determinar (5).

En caso de desarrollarse la suspensión del trabajo en los dos sectores, su movilización podría constituir un ejemplo para el resto de las clases trabajadoras que por esta época han visto ya completamente eliminadas por la inflación sus conquistas reivindicativas de las últimas convenciones y aún menoscabadas las condiciones salariales y prestacionales anteriores a éstas.

Difícilmente podrán los ofrecimientos del gobierno y las orientaciones aletargantes de las dos centrales patronales contener las presiones espontáneas que irán brotando en las bases de las asociaciones sindicales. De hecho, ya las directivas de la Federación cundinamarquesa de la UTC (Utracún) se han visto forzadas a proponer la realización de un paro gene-

ral (6) y el gobierno mismo dió muestras inequívocas de su temor actual a los levantamientos populares, más o menos espontáneos cuando, con ocasión de las organizadas manifestaciones del 1o. de Mayo, ordenó un despliegue militar hasta ahora desconocido para esta fecha. Sin embargo, debe también reconocerse que hacia Julio-Agosto de este año, cuando posiblemente estarían emergiendo estas expresiones de combatividad de las clases trabajadoras, el gobierno estará presentando tasas mensuales de inflación relativamente bajas, tanto por razón de la estacionalidad de estos índices como por efecto de las medidas contraccionistas que se han venido adoptando. Además, para esa época estará cobrando fuerza la distracción electoral, con todos los anuncios, programas y falsas esperanzas que ella despierta.

En fin, puede decirse que el movimiento obrero sindicalizado goza, por razón de la crisis de estabilidad y del alarmante deterioro salarial, de gigantescas posibilidades de organización y de movilización, sobre las cuales se volverá en el Capítulo final de este trabajo. Basta decir, por ahora, que la estabilidad gubernamental depende, en buena parte, de las acciones sindicales y que este condicionamiento abre la puerta a amplias posibilidades reivindicativas.

A su vez, la agitación popular aparece sujeta, en buena medida, a la energía de los movimientos de los educadores y de los trabajadores de hospitales y clínicas oficiales. En uno y otro caso se trata de organizaciones de amplio impacto racional. Una y otra han surgido y avanzado (haciendo por ahora abstracción de su desarrollo histórico concreto en Colombia) a partir de dos determinantes fundamentales: 1) la proletarización creciente de estos grupos de "trabajadores independientes"; 2) las especiales limitaciones salariales en el sector público.

Ciertamente, tanto el personal médico y para-médico como los educadores siguen realizando actividades fundamentalmente intelectuales. Sin embargo, hoy en día, se ven en la necesidad de intercambiar su fuerza de trabajo por un salario, de sujetarse al régimen jerárquico burocrático y de realizar las tareas, cumplir los horarios, atender los lugares y aún de observar las pautas trazadas por los programas educativos y de salud en cuanto al contenido de sus labores. Esta transformación se encuentra subyacente en la progresiva identificación de estos sectores con las clases trabajadoras, sus aspiraciones reivindicativas y sus instrumentos de lucha. Además, como las funciones médicas y docentes forman parte de la necesaria participación del Estado actual en la atenuación de los costos de capital variable, es decir, en la reproducción biológica e ideológica de la fuerza de trabajo, los profesionales en vía de proletarización se encuentran frente a las limitaciones salariales del sector público (7). Estas limitaciones resultan de las restricciones fiscales del Estado ante las múltiples colaboraciones que demanda el capital monopolista para su reproducción (8). Consecuencialmente, los maestros y los profesionales de la medicina que van llegando a engrosar las filas trabajadoras tienen en las presiones oficiales para contener sus salarios frente a los del resto de la población sindicalizada, un factor adicional de agresividad laboral.

La generalidad y combatividad alcanzadas por estos dos movimientos vienen dejando múltiples experiencias a las luchas de las clases trabajadoras:

- 1) Enseñanzas en cuanto al significado reaccionario de las centrales patronales, particularmente de la UTC que, so pretexto de defender los intereses de las clases trabajadoras afiliadas al seguro social, ha venido rechazando y dividiendo el movimiento en los hospitales del Estado. Con tal argumento

se llegaría, como lo están haciendo las directivas de tales centrales, a identificarse con la ideología del "servicio público" que tiende a impedir el ejercicio del derecho de huelga en todos los puntos nodales de la reproducción del capital. Y como el ciclo capitalista-monopolista liga cada vez más sectores, menores y más marginales serán las posibilidades huelguísticas, tal como lo viene demostrando la ampliación del concepto de "servicio público" en los últimos decretos sobre arbitramento.

Además, la única posición común entre UTC y ASMEDAS (la asociación de médicos que decretó y sostuvo el paro del Seguro en Agosto y Septiembre del año pasado), esto es, la defensa de integración institucional en el Ministerio del Trabajo de la atención médica y de las prestaciones de jubilación, invalidez, vejez y muerte obedece, en el caso de la UTC, a la inmersión de la central dentro de la idea estatal de que este Ministerio "pertenece" a los trabajadores y "representa" sus intereses y las aspiraciones de prebendas burocráticas que tanto atraen e los directivos de la central de trabajadores (9).

2) Lecciones también en cuanto a los reales intereses del capital en los servicios de salud y educación. En materia de medicina, es ahora cristalino que el principal atractivo de los patronos en la atención pública consiste en las economías de escala ofrecidas por el Estado. De allí que cuando aparecen entidades privadas de gran magnitud que pueden sustituir a los institutos oficiales, tal como ocurre con las Cajas de Compensación Familiar, el capital no duda en contemplar la alternativa. Con mayor razón si se tiene en cuenta que la ofensiva de los trabajadores del Estado puede afectar la estabilidad y aún las ventajas monetarias ofrecidas por la prestación estatal del servicio y que los grandes sectores del capital pueden valerse de la privatización para estratificar el servi-

cio y, por este camino, impulsar el aburguesamiento de sus propios trabajadores (10).

3) Aleccionamientos en cuanto al significado político, es decir, de clase, de la división interna del grupo médico. La Federación Médica Colombiana se ha separado de Asmedas y ha agrupado a su alrededor a destacados galenos que por tradición, por méritos, por posición social o por cualesquiera otras razones, pueden apearse al ejercicio independiente de la profesión y que disienten de los procedimientos de lucha empleados por Asmedas, es decir, los procedimientos propios de las clases trabajadoras.

La Federación no solamente abandonó el movimiento médico huelguístico del año pasado, protestando contra el carácter político del mismo, sino que convocó para los primeros días de Mayo de 1977 un foro destinado a estudiar la división del ICSS en Instituto Nacional de Seguros de Salud e Instituto Nacional de Seguros y Prestaciones Económicas. Esto es, a respaldar la tendencia gubernamental a la escisión administrativa de las prestaciones entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo. Además, se mostraba partidaria de una apertura hacia la privatización del servicio y, temerosamente, no tomaba partido en cuanto al núcleo jurídico del conflicto, es decir, en cuanto a la clasificación de los profesionales del Instituto como empleados públicos o trabajadores oficiales (11).

Al final parece que se incliaron por la separación institucional entre los dos grupos de prestaciones y se mostraron partidarios de conservar la calidad de trabajadores oficiales y mantener por ende el instrumento de la contratación colectiva (12). Con todo, el rompimiento entre los médicos, determinado por el proceso de proletarización a que se aludía anteriormente, ha quedado definitivamente planteado.

4) Experiencias, por último, en cuanto a la versatilidad de las estrategias estatales encaminadas a desorganizar, dividir, postergar, reprimir e integrar los movimientos laborales.

En el sector de la salud las tácticas gubernamentales han cubierto todo el rango desde la represión física, la mentira, el fomento a la oposición entre los trabajadores, el incumplimiento de la palabra empeñada, el reemplazo de un ministro, la dilación y la elaboración secreta de las nuevas normas que regirán el sector, etc. (13).

En el campo de la educación, se ha ido del desconocimiento de la Federación de Educadores, pasando por las destituciones, hasta llegar a las múltiples facetas del nuevo Ministro: espíritu amplio y "democrático" que dialoga con todos los sectores para recordarles que, a pesar de sus buenas intenciones, las restricciones presupuestales impiden satisfacer las exigencias reivindicativas de los maestros y que el gobierno "no está dispuesto a que se utilice el chantaje y tomará las medidas necesarias cuando se realice la huelga ilegal anunciada por el magisterio" (14).

1.2. Los movimientos urbanos, esto es, los que se definen alrededor de las luchas propias de la ciudad (tierra, habitación, servicios públicos, estratificación metropolitana, etc.) tampoco atraviesan un período de ofensiva espectacular.

Se han dado, sí, algunos paros cívicos, tales como los desarrollados (y posteriormente reprimidos) en Riohacha y en la población de Amalfi (Antioquia), en ambos casos por la negligencia estatal en la prestación de los servicios urbanos elementales: carencia de agua potable, insuficiente suministro de energía eléctrica, descuido en las labores de aseo, etc. (15). De la misma manera, se han desencadenado algunos intentos de desalojo de predios urbanos, tales como los

emprendidos en los barrios Bosque Calderón y Las Brisas en Bogotá, pero en ambos casos el gobierno retrocedió ante la movilización popular que originaron los lanzamientos (16).

Así que, de manera general, puede decirse que no existe un auge especial de las luchas urbanas y que, dondequiera que se han dado tales luchas y han mostrado posibilidades de ampliarse o de producir reacción en otras capas de trabajadores, el Estado ha adoptado una política similar a la laboral: concesiones, paliativos, aplazamiento del conflicto. Y seguramente los determinantes de esta política del temor son los mismos que los comentados para el caso del tratamiento de los sindicatos.

Las luchas propias de la urbe, pero de un carácter enteramente diferente, son las acciones criminales, particularmente los delitos más generalizados contra la propiedad y la vida e integridad de las personas que determinan el clima global de inseguridad que se vive en las grandes ciudades colombianas. Pero las tasas delictivas correspondientes a estos crímenes venían elevándose geoméricamente desde antes de la crisis política actual y nada parece indicar que se hayan salido extraordinariamente de sus tendencias (17). Además, para su control se han previsto las reformas del Código Penal y de la Constitución sobre las cuales vienen opinando los más diversos representantes de los partidos, de las fuerzas armadas, del gobierno, de los profesionales del derecho, etc.

El lenguaje altisonante en que se han formulado todas las opiniones indica que no se trata de un tema de los que constituyen fuente de discordia entre las clases dominantes sino que, por el contrario, existiendo un acuerdo fundamental en cuanto a la necesidad de subordinar las capas criminales (subempleados, desempleados intermitentes, lumpenproletariado, etc.) con la máxima eficiencia y el menor costo, las

divergencias giran alrededor de cuál es la mejor estrategia.

Sin embargo, a pesar del acuerdo fundamental en cuanto a la necesidad de controlar estas capas de la población, la discusión de los medios adecuados da lugar a un debate ideológico-político sobre los principios de legitimación del Estado capitalista que adquiere mucha importancia en la coyuntura actual.

Se trata de optar entre mecanismos de sanción del crimen que recogen y repiten los principios de legitimación de la dominación capitalista (igualdad de los ciudadanos ante la ley, derecho a la defensa a través de un proceso preestablecido, privación de la libertad como pena general, presunción de inocencia en el acusado; en pocas palabras, los principios de exaltación de la persona y de su libertad, que constituyen un traslado al campo penal de los fundamentos de la unidad nacional y de la legitimación del Estado capitalista) o, por el contrario, acudir a instrumentos de carácter excepcional que, a pesar de abrir una brecha en la estructura ideológica justificativa de la dominación política, resultan más eficientes y menos costosos en el momento actual.

La disyuntiva va creando dos bandos relativamente definidos: De un modo los profesionales del derecho, partidarios del reformismo procedimental, es decir, de preservar los pilares sobre los cuales se edifica toda la ideología jurídica capitalista y, del otro, los militares y la corriente alvarista del partido conservador, partidarios éstos últimos de adoptar un cambio radical en materia de prevención y represión del crimen:

“La causa del deterioro de la seguridad está en la base. En que los derechos y garantías sociales establecidos en la Constitución son cuestionables, como lo es también

el código penal y lo son las leyes complementarias. Se ha llegado a establecer, de hecho, una especie de 'objeción de conciencia' frente a toda aparición de la autoridad o ante cualquier aplicación de un mandato legal. Es esta la forma más disolvente de la acción revolucionaria, mucho más eficaz y corrosiva que las bombas, el asesinato o las barricadas.

"Los intelectuales de izquierda están creando un mito del pluralismo, que se lo presentan a la burguesía como una forma moderna de la tolerancia. Y ésta lo acepta por temor de no 'estar a tono' y porque estima de antemano que los valores tradicionales deben defenderse solos. No merecen que por ellos se haga un sacrificio y mucho menos emprender una cruzada ...

"A qué grado de inseguridad se necesita llegar para que sea posible intentar una recuperación del consenso sobre los valores que la sustentan? Querer anteponer a una respuesta un cúmulo de consideraciones sociológicas, parece no ser sino una simple acción dilatoria. Cuando en el fondo del problema lo que hay es una indefinición política" (18).

El gobierno y el Partido Liberal, por su lado, se han mostrado partidarios de una solución ecléctica. Sin llegar a procurar un viraje de excepción en el aparato de prevención y represión del crimen, impulsan, sí, el montaje de una maquinaria excepcional para aquellos delitos que, a su entender, tienen mayor impacto en el desquebrajamiento de la capacidad del Estado para subyugar e integrar las clases populares. Aquí se agrupan los delitos considerados subversivos (rebelión, sedición, asonada), particularmente todas las formas de terrorismo, y el delito del secuestro, ya sea éste operado por delinquentes comunes agrupados en "asociaciones para delinquir" o por grupos políticos revolucionarios (19).

Esta diferencia táctica ideológica adquiere gran importancia política dentro de la coyuntura actual. La importancia resulta de la circunstancia de que la dictadura militar es contemplada como una de las posibles soluciones del bloque en el poder a la presente crisis política. Siendo así, lo que era antes una mera divergencia de postulados estratégicos (puesto que existían pocas posibilidades reales de que la escalada del crimen común y de la guerrilla urbana obligar a la sustitución del régimen democrático-burgués), ha venido a sumarse ahora a otros factores políticos que presionan la constitución de un régimen de excepción: la incapacidad del Estado y de los partidos políticos para cohesionar las clases dominantes. Tanto más, cuanto más factores de descomposición política atizan las llamas permanentes de la ideología militar:

a) la ofensiva guerrillera de los últimos meses y las posibilidades de una mayor coordinación de los grupos FARC-ELN (20) que, antes que constituir en sí mismas una amenaza para la soberanía militar de las fuerzas armadas, están menoscabando los principios de soberanía política del Estado y de hegemonía de las fuerzas armadas dentro del territorio nacional. Todo esto en momentos de auge de las luchas guerrilleras y criminales urbanas:

b) el surgimiento de grupos armados y organizaciones paramilitares paralelas a las fuerzas armadas. Tal es el caso de las llamadas "mafias", supuestamente vinculadas a la producción y mercadeo de marihuana y estupefacientes, y de la vigilancia privada armada, ésta última objeto de una evidente proliferación en los últimos años. La mayor parte de los centinelas privados se encuentran, sin embargo, sujetos a uno u otro tipo de supervisión estatal;

c) la notoria actividad delictiva de las clases dominantes, de

la "clase política" y de los grupos burocráticos. El contrabando, el tráfico de estupefacientes, la calumnia, la injuria, el cohecho, etc., son delitos que no solamente muestran un desmoronamiento de las reglas económicas y políticas de las sociedades capitalistas sino que también tocan las entrañas de las máximas militares del mantenimiento del orden y de la imposición de la legalidad formal (los juicios emprendidos por la dictadura argentina contra los altos niveles burocráticos anteriores al presente régimen ilustran claramente la tendencia general de los gobiernos militares de derecha a justificar su presencia en aras del retorno a la integración social, así sea sancionando también a los altos estratos y aplicando las normas de manera general).

1.3. Las luchas estudiantiles, principalmente las universitarias, han venido, por razones similares a las planteadas para el caso de la estrategia estatal ante lo criminal, a desempeñar un papel coyuntural importante. Este nivel de los enfrentamientos populares está acelerando el proceso de definición de una estrategia estatal ante los combates urbanos.

Se observa, en efecto, una corrección progresiva de la política gubernamental, no tanto en lo relativo al contenido mismo de los programas educativos y a la composición política del personal docente, que siguen gozando de una relativa autonomía, como en cuanto al afán de restablecer "el orden" la legalidad, la disciplina y "la conducta cívica" en las residencias, en los salones de clase, en los escenarios culturales, y en los campos universitarios y también fuera de éstos.

Ciertamente, esta metamorfosis que va de la tolerancia a la represión, se enrumba dentro del cauce general de reducción del ámbito universitario como mecanismo para disminuir la extensión de la combatividad estudiantil y facilitar el control y la supervisión (21).

Dentro de esta trayectoria, las actuales políticas policivas de López constituyen una prolongación, más burda y más de corto plazo, de las políticas de desorganización del movimiento estudiantil, de transformación de la universidad y del aparato educativo y de sujeción INSTITUCIONALIZADA de este escenario de combatividad pequeño-burguesa. Pero sería miope negar el significado simbólico del viraje o desconocer su articulación con las otras áreas de la lucha de clases. Desde este punto de vista, las frecuentes invasiones policivas a los predios universitarios no constituyen simplemente la represión de expresiones anárquicas (muchas veces provocadas por los aparatos estatales) en los alrededores del campus y fuera de él. Más allá de este entendimiento inmediato, conviene extraer las siguientes vinculaciones de los procesos políticos con la política universitaria.

a) la imposición policiva del orden dentro de la universidad constituye una acogida de las recomendaciones explícitas de la corriente laureanista del conservatismo sobre esta materia y del clima general de omnipresencia policivo-militar que han venido impulsando las fuerzas armadas y algunos alcaldes de las grandes ciudades (caso Gaitán Mahecha en Bogotá, por ejemplo). Se trata, entonces, de una reculada del Presidente López en la cual se abandonan abiertamente las ideas libertarias y se las sustituye por dispositivos propios del régimen de excepción.

b) además de constituir una alteración de la política universitaria inicialmente propuesta por el gobierno, los nuevos instrumentos de control están en aparente contradicción con las políticas de tolerancia y transacción que el Ejecutivo viene adoptando en el campo laboral y aún en el terreno de las luchas urbanas. Esta contradicción, si bien aparece determinada por las diferencias en la combatividad de los distintos tipos de movimiento en el período actual y no deja de

reflejar la debilidad gubernamental frente a la imposición por parte del bloque en el poder y de algunos aparatos estatales (fuerzas militares, organismos de seguridad) de una línea de acción contraria a los derroteros inicialmente diseñados por López.

Esto no significa que se deba esperar una consistencia lógico-formal entre las plataformas ideológicas y las decisiones gubernamentales y, menos aún, que el gobierno se halle dividido hasta el punto de que López no represente los intereses comunes de las clases dominantes. Lejos de allí. Lo que se quiere recalcar es que la inestabilidad gubernamental ha cerrado al Ejecutivo la posibilidad de ensayar propuestas alternativas, tales como los "experimentos" del comienzo de su período y que tanto la política de componendas con los brotes de rebeldía laboral como la decisión de vigilancia de la ciudad universitaria de Bogotá están en buena parte determinadas por la fragilidad presidencial del momento;

c) La circunstancia de que la presencia de una fuerza de guardia dentro de la universidad se haya querido legitimar mediante un plebiscito popular universitario (propuesta inicial del rector Correal Cabral) o mediante un "consenso" de todos los niveles del instituto docente (tal como parece imponerse en la fecha de redacción de estas líneas) no impugna en nada el análisis precedente. Simplemente, reitera la preferencia estratégica del gobierno de López por las vías de la integración mediante el acuerdo;

d) en fin, las perspectivas de una ciudad universitaria vigilada a largo plazo y la relativa facilidad y eficacia que va teniendo el plan hasta el momento, están demostrando a las clases dominantes, a los burócratas y a las fuerzas armadas, la viabilidad de este tipo de soluciones (22).

2. LAS CONTRADICCIONES INTERNAS DEL BLOQUE EN EL PODER

Quizás las relaciones más subestimadas por las explicaciones presentadas en el Capítulo Primero son los enfrentamientos que se vienen dando entre las distintas fracciones del capital. Tales interpretaciones, así como las opiniones callejeras de la situación, tienden a considerar las actuales divergencias que se vienen dando entre la fracción del capital productivo, de una parte, y las del capital especulativo y del capital exportador, de otra, como oposiciones "normales" en el centro del bloque en el poder. Estaríamos entonces frente al género de discrepancias que no determina reajustes en la jerarquía de las distintas capas y fracciones y que, en consecuencia, no ocasionan inestabilidad política. Elaborando un poco más, se diría que las reclamaciones que vienen elevando los distintos gremios, particularmente los representantes de los sectores productivos, corresponden a la táctica ordinaria de alcanzar una cuota superior en la distribución de la plusvalía social y que la bonanza cafetera, antes de agudizar las contradicciones entre las clases dominantes, ofrece a todas ellas mayores posibilidades de expansión y consolidación. Si bien se suele admitir que la bonanza beneficia en forma desigual a las distintas fracciones, se asimila esta situación a muchas otras en las cuales factores más o menos aleatorios y políticos estatales de diversa índole han favorecido desigualmente a cada una de las fracciones del capital.

Distinto es el entendimiento que se tiene en el presente estudio. Aquí se sostendrá:

- 1) que el bloque de clases dominantes atraviesa por una crisis de hegemonía determinada por la progresiva pérdida de influencia de la burguesía nacional y su subordinación a manos del capital monopolista internacional;

- 2) que si bien esta pérdida de influencia había sido determinada ya por el avance "natural" del capital internacional hacia los sectores monopolistas y de elevada composición orgánica de capital, hasta el punto de que no se podía hablar de burguesía nacional sino de "burguesía interior" (23), bajo el gobierno de López Michelsen se da un desamparo estatal de la burguesía interior desconocida hasta ahora. Es decir, el gobierno de López abandona aún las pretensiones de desarrollo de un capital nacional subordinado pero protegido por el Estado;
- 3) que en medio de esta carencia de poder político de parte del capital nacional se presenta la bonanza cafetera como elemento coyuntural, más o menos exógeno, que agudiza las contradicciones internas del bloque por dos razones fundamentales:
 - a) la abundancia de divisas revive las pretensiones de fortalecimiento y de relativa autonomía de la producción nacional. Estas esperanzas se ven frustradas por las políticas contraccionistas del gobierno y, sobre todo, por la ausencia de estímulos fiscales (exenciones tributarias, subsidios) y de "complementación" estatal de las inversiones productivas (obras de infraestructura, producción de insumos subsidiados, etc.). Además, los sectores productivos internos comienzan a percibir el sentido global de las medidas económicas de López: la neutralidad fiscal impuesta por la *reforma tributaria*, la liberación de las tasas de interés, la ausencia de una programación de desarrollo manufacturero, la reducción de los aranceles, la relajación del control de importaciones y la reducción de la inversión pública forman parte de una maquinaria que, lejos de ser tan "neutral" como se pretende, está amenazando los intereses del capital productivo nacional y están abriendo las barreras nacionales a la inversión extranjera directa y a las mercancías foráneas;

b) al mismo tiempo, no se ha constituido el andamiaje productivo interno capaz de sustituir la producción nacional y de satisfacer la elevación de la demanda ocasionada por la bonanza. De hecho, la bonanza sorprende a la producción agrícola interna en un período de transición y de dubitación gubernamental en cuanto a las vías a seguir para la transformación del agro. Además, el carácter transitorio de la ampliación del mercado interno (se supone que los elevados precios del café se sostendrán por unos dos años más, es decir, hasta mediados de 1979) (24) y las condiciones económicas y políticas de la producción capitalista internacional (garantías políticas para el capital extranjero en el futuro, existencia de obras de infraestructura y de apoyo estatal, niveles de los salarios y de la combatividad de los trabajadores sindicalizados, mantenimiento de algunas normas restrictivas a la inversión foránea, etc.) parecen estar determinando la ausencia de masivas inversiones locales de parte del capital extranjero (25). De allí que el beneficio de las políticas lopistas al capital internacional no pueda demostrarse empíricamente (26). Lo que, por otra parte, no significa que su sentido económico-político sea indescifrable teóricamente;

4) que como consecuencia de esta falta relativa de inversión extranjera y de incrementos en la participación estatal dentro del sector productivo, en medio de una declinación del sector privado nacional, se ha agudizado la crisis de inestabilidad del bloque. Es decir, que no existe un remplazo claro de la burguesía nacional que a nombre del sector productivo comparta la posición hegemónica con los exportadores de café y con el capital bancario;

5) que todo lo anterior no significa que los años 1976 y 1977 hayan sido ni vayan a ser períodos "malos" para el sector manufacturero. Por el contrario, la elevación de la

demanda y el deterioro de los salarios reales a causa de la inflación permiten una realización más fácil de la plusvalía, una mejor utilización de la capacidad instalada y un aumento en el trabajo excedente (27). Lo que se busca recalcar aquí es la negligencia estatal frente a los requerimientos de los sectores productivos internos;

6) que tampoco se excluye la posibilidad de que el gobierno modifique parcialmente sus políticas y conceda estímulos tardíos y relativamente marginales a la industria (28). Esto por cuanto el análisis trata de desentrañar el sentido político de las TENDENCIAS DOMINANTES en el sector público y de superar la enmarañada red de medidas y contra-medidas gubernamentales, al interior de la cual toda interpretación resulta válida;

7) que, por último, existe otra perspectiva desde la cual puede detectarse la pérdida de poder político de la burguesía interior. Esta perspectiva parte del examen de la inflación y de su impacto desigual sobre las tasas de ganancias de los distintos sectores. Como los mayores beneficios del alza general en el nivel de precios son captados por el capital especulativo (los exportadores cafeteros y los llamados "intermediarios financieros"), las tasas de ganancia y las posibilidades de acumulación del sector productivo (y aún del sector manufacturero avanzado) tienden a colocarse por debajo de los márgenes de ganancia, del interés y de la renta que irriga a los mercaderes y a los financistas. Esta circunstancia produce, cuando menos, dos consecuencias:

a) como las unidades capitalistas individualmente consideradas no son ni pueden ser indiferentes ante la distribución de la plusvalía social (son por naturaleza "envidiosas"), tratarán de buscar el apoyo estatal para que altere las reglas de juego que actualmente disponen la distribución y, en ca-

so de no encontrar eco en el poder público, intentarán trasladarse hacia los sectores más rentables (29), reforzando de esta manera la decadencia política de la burguesía interior;

b) las posibilidades de un futuro desarrollo de una burguesía con intereses nacionalistas dependen básicamente de las relaciones entre el capital bancario (incluyendo aquí a los exportadores cafeteros que a través del Banco Cafetero, de la Caja Agraria, de Concasa, etc., operan como institución financiera) y la industria nacional, de una parte, y entre el capital bancario y los monopolios extranjeros, de otra. Si prevalecen las primeras, se estará frente al caso más o menos típico de integración del capital industrial y el capital bancario (fusión que se conoce como "capital financiero") con limitadas pretensiones de fortalecimiento de los intereses nacionales. Si, por el contrario, predomina una relación de subordinación entre el capital especulativo nacional y el capital monopolista extranjero, se estará más bien en presencia de la hegemonía de lo que se ha llamado "oligarquía" o "burguesía compradora", esto es, una burguesía que se limita a actuar como intermediaria o lazo de unión que canaliza la reproducción del capital extranjero dentro de las formaciones atrasadas de la cadena imperialista. Las múltiples conexiones existentes entre el capital financiero internacional y los establecimientos de crédito colombiano, acentuadas por el gobierno de López a través de la mal llamada "colombianización" de la banca, parecerían indicar que la vertiente preponderante conduce por la ruta de la burguesía compradora (30). En fin, sea cuales fueren las inclinaciones precisas de las cifras, hay una observación de carácter general en materia de las pretensiones nacionalistas de las distintas capas de la burguesía: el capital especulativo no tiene, en principio, las mismas aspiraciones de autonomía que tiene la fracción industrial nacional ni se encuentra necesariamente en contradicción con los monopolios extran-

jeros. De allí que sus alianzas con las otras fracciones del capital sean por naturaleza mutables.

2.1. Las demandas de la producción capitalista sobre el Estado en el estadio monopolístico. Las transformaciones del aparato oficial y la ampliación del campo de acción de la administración pública, hasta llegar a lo que se ha llamado falazmente el intervencionismo estatal, están determinadas por las nuevas necesidades del proceso de reproducción del capital a medida que las unidades productivas se centralizan y que las masas individuales de capital se concentran.

En efecto, con la acentuación de las tendencias hacia la monopolización y hacia la elevación de la composición orgánica de capital aparece también un reforzamiento de la tendencia a la baja en la tasa de ganancia. Esta última resulta de la creciente dificultad en contrarrestar el impacto negativo del crecimiento del capital constante sobre la tasa de ganancia mediante el aumento de la tasa de plusvalía. Es decir, después de un cierto límite (que socialmente determinado), resulta difícil variar en provecho del capital la proporción entre tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo excedente.

El fortalecimiento de la tendencia a la baja en la tasa de ganancia explica que en el estadio monopolista del capitalismo, y a medida que se universaliza y se integra este modo de producción, los ciclos económicos tiendan a ser más frecuentes, más generales y más intensos. Es decir, esa fuerza que impulsa la reducción de la relación de la ganancia con el capital empleado en una determinada producción constituye la causa estructural de las recesiones capitalistas. Lo que no desconoce el impacto coyuntural de los desajustes entre oferta y demanda de bienes de producción y bienes de con-

sumo sobre los períodos de auge y de estancamiento capitalista (31).

Ahora bien, cabe al Estado nacional desempeñar múltiples funciones para garantizar la reproducción ampliada del capital y preservarlo tanto de la amenaza de la reducción en la tasa de ganancia como de su destrucción o absorción por el capital foráneo:

- 1) establecimiento de un régimen de dominación y desorganización de las clases trabajadoras;
- 2) disminución de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo, principalmente a través de su participación en la educación, en la seguridad social (incluyendo aquí la atención pre-escolar de los niños), en la transformación del agro y en la intervención del mercadeo para asegurar la distribución de alimentos baratos, en el suministro público de los servicios urbanos esenciales, etc.;
- 3) inversión en las actividades productivas que por una u otra razón no son atractivas para el capital pero que constituyen la infraestructura indispensable para la producción. Entre tales razones pueden citarse: El riesgo, el tiempo que debe transcurrir entre la inversión y la obtención de las ganancias, el tamaño del mercado, las presiones políticas sobre los precios, etc. Además, el Estado contribuye también a la reducción de la magnitud del capital constante (medios de producción, materias primas) requerido para la producción mediante el suministro de insumos baratos al capital, mediante el otorgamiento de subsidios, mediante las exenciones tributarias, etc.;
- 4) estímulos al capital nacional para que conquiste los mercados exteriores y se localice allende las fronteras

territoriales . Y, lo que es la otra cara de la misma moneda, protección del capital nacional dentro de la formación.

La primera de las funciones que vienen de ser citadas es realizada por todo Estado capitalista en interés común de todas las fracciones del capital. La segunda, si bien ha conocido un ensanchamiento en el presente estadio monopolista, también ha formado parte de todas las formas del Estado capitalista y sus beneficios se extienden también a todas las fracciones. La tercera y la cuarta, por el contrario, producen generalmente efectos diferenciales entre las capas capitalistas y, en consecuencia, permiten apreciar el poder relativo de cada una de ellas. En el caso que nos ocupa, permitirán discernir los reajustes que se vienen dando en el poder relativo de las distintas fracciones del capital durante el gobierno de López, reajustes que han venido a determinar la presente crisis de inestabilidad.

Así, podrá decirse, de manera general, que un Estado que no reconoce subsidios, estímulos, protecciones, complementos al capital productivo interno, estará abandonando el capital nacional a las garras del capital extranjero avanzado por el solo hecho de que éste último goza de ventajas "naturales" (es decir, propias del modo de producción capitalista) frente al capital atrasado y frente al capital competitivo. Aunque, indudablemente, la falta de colaboración estatal, si se practica de una manera general, afectará por igual a todo el capital productivo, ya sea nacional o internacional, localizado dentro del país, no por esto deja de ser cierto que la desprotección pública, en un mundo donde la competencia es la regla y la monopolización está a la orden del día, afectará mayormente al capital productivo nacional que quedará expuesto a las imposiciones del capital foráneo a través de sus posiciones monopolistas y de su mayor composición orgánica de capital. Además, debe tenerse en cuenta que en otros

Estados capitalistas sí se da una participación activa del Estado en la atenuación o superación de la ley de la baja tendencial de la ganancia. Y, consecuencialmente, que las condiciones para la producción de la ganancia serán, por lo que atañe al apoyo oficial, superiores en estas formaciones.

2.2. La consistencia de las políticas de López antes y después de la bonanza. Quienes hacen un análisis lógico-formal o, peor aún, nominal, del manejo económico impulsado por el presente gobierno, concluyen en una contraposición de las políticas impulsadas por los ministros Botero y Espinosa. El primero habría sido más consecuente con sus principios liberales puesto que siempre se habría opuesto a toda forma de control "artificial" sobre la producción o sobre los precios. El segundo, por el contrario, habría roto los derroteros iniciales del gobierno al imponer la congelación de determinados precios, restringir los aumentos de otros y, en fin, intervenir en múltiples formas los procesos de producción y distribución (32).

Si, por el contrario, se abandonan los purismos teóricos y la retórica formal para escudriñar más bien el efecto material de las políticas económicas, no se puede menos que admirar la armonía de las acciones y omisiones del gobierno de López (33). Es que, como se verá más adelante, tanto el *laissez-faire* de Botero como el intervencionismo de López desatienden las necesidades del capital productivo.

Conviene, pues, seguir la secuencia de las principales regulaciones económicas de López para captar en ellas su coherencia política:

- 1) La reforma tributaria de 1974 no conduce, como hoy ya está suficientemente demostrado, a una distribución del

ingreso. De hecho, su principal efecto consiste en la eliminación de los estímulos fiscales que de hecho o de derecho venían beneficiando a determinados sectores productivos: los sectores manufactureros avanzados, los ganaderos, los agricultores. Sólo dos años y medio más tarde, después de que la mayoría de las críticas a la reforma se habían dirigido a su oportunidad y a las dificultades para su administración, los representantes de los sectores productivos internos comienzan a captar, con ocasión de la incapacidad productiva nacional que pone en evidencia la bonanza, el impacto de esta reforma orgánica sobre la inversión y la producción interna (34);

2) Paralelamente, se ordena el desmonte del certificado de abono tributario, mecanismo de impulso a los productos nacionales en los mercados externos que venía ofreciendo resultados satisfactorios. Además, debe tenerse en cuenta que el CAT, como subsidio que era a las exportaciones industriales y agro-industriales, constituía uno de los caminos para independizar el proceso de acumulación capitalista del albur de los precios internacionales del café y, sobre todo, del condicionamiento crediticio, fiscal, monetario y, en general, político impuesto por su sujeción a las divisas cafeteras (35). Aunque en los primeros meses del gobierno de López, la eliminación de subsidios y exenciones podía justificarse, en aras de controlar la inflación ocasionada por el déficit fiscal y de detener así el deterioro de los salarios reales y los altos beneficios del capital especulativo, el argumento dejó de tener peso a medida que, a lo largo de 1976, se fue esclareciendo el saneamiento de las finanzas públicas y, sin embargo, el Presidente y sus ministros reiteraron su apego a las posiciones liberales;

3) La liberación de las tasas de interés contribuyó sin duda al fortalecimiento del capital bancario y a la acentuación del proceso de monopolización;

4) En el mismo sentido, se elabora un plan de desarrollo que, por primera vez en la breve historia de los planes generales de desarrollo, se desentiende de los estímulos a la industrialización y a la elevación de la productividad agro-industrial. Por el contrario, se plantea una vía de fortalecimiento de la economía campesina distinta de la estrategia distributiva de comienzos de los sesenta y del restablecimiento de la aparcería que venía siendo intentado en los últimos años. Se trata del programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI) que, sin embargo, no puede producir resultados en el corto plazo, menos aún si se le continúa implementado al lentísimo ritmo desarrollado hasta ahora. Si a las variaciones en la política de transformación de los sectores de cultivos tradicionales se suma el intenso verano de finales del 76-comienzos del 77, se entiende que la bonanza haya sorprendido al país en medio de una aguda crisis de producción de los alimentos, consumidos por las clases trabajadoras y, consecuentemente, de un factor de agudización de la inflación (36).

5) En materia de importaciones, López modifica la que había sido una política reiterada en los años del Frente Nacional. De la protección aduanera y de la selección de las importaciones, para el mejor desarrollo de la producción interna, pasa a la liberación de importaciones, a la reducción arancelaria y a la tolerancia o fomento de las importaciones de bienes de consumo. Poco importa que las justificaciones explícitas de esta política fueran, en los primeros meses del cuatrienio lopista, las de proteger al consumidor y estimular la eficiencia y, en los meses más recientes, las de controlar la tendencia alcista en el nivel de precios. Lo importante es que, pese a existir mecanismos alternativos para controlar la inflación, se opte por aquellos que ya se venían desarrollando como "filosofía" del gobierno y que desamparan la producción nacional. Tanto las disposiciones generales sobre

disminuciones del impuesto de aduanas y sobre relajamiento del régimen de control de importaciones, como la baja en la tasa real de cambio, son instrumentos no-selectivos para lanzar la producción interna a la competencia internacional.

6) La inversión pública viene sufriendo una contracción considerable, con notable desestímulo para las firmas contratistas y, en general, para la reproducción del capital que necesita de complementos que reduzcan sus costos de capital constante. Constructores y firmas contratistas se quejan de ser un sector desfavorecido por las políticas contraccionistas de los medios de pago, por la mora oficial en el pago de las obligaciones (lo cual, por otra parte, también parece formar parte de la política anti-inflacionaria), por la disminución de la inversión pública y por la discriminación, implícita en las modalidades de contratación estatal, en contra de los constructores nacionales y en favor de los contratistas extranjeros (37). Además, es conocida la difícil situación de la mayor parte de las empresas en que participa el Instituto Financiero Industrial y las exigencias de "racionalidad" económica y administrativa que se le vienen imponiendo a este instituto desde Planeación Nacional y otros organismos del gobierno. Es decir que se busca ir eliminando la participación del Estado en sectores que por razones económicas o políticas, producen tasas de ganancia inferiores a la media;

7) A pesar de que el impacto de la bonanza sobre los medios de pago se fue cristalizando a lo largo de 1976 y de que las perspectivas de crecimiento de la agricultura tradicional y de la agricultura mixta venían anunciando el estancamiento o la disminución de la producción en estos sectores, el gobierno se cruza de brazos y se limita a señalar repetidamente que los resultados de la producción y de la distribución del grano corresponden a los cafeteros, hasta el

punto de que se populariza la frase presidencial "la bonanza es de los cafeteros". A medida que se acerca el final del año 76, se agudizan las perspectivas inflacionarias sin que se produzca una alteración de la política gubernamental de no intervención. Finalmente, a partir de los últimos días del año pasado y durante todo el transcurso del presente, el nuevo Ministro de Hacienda ha venido tejiendo una colcha de retazos antiinflacionaria sin que se perciban enmiendas sustanciales en la posición de indiferencia gubernamental ante la producción interna. Por el contrario, algunas de las regulaciones coyunturales perjudican los intereses del capital productivo interno. De manera muy sintética, las providencias encaminadas a corregir las elevadas tasas de inflación pueden enumerarse así:

- continuación de la política de liberación de importaciones y de reducción de aranceles. Al mismo tiempo, se reviven los depósitos previos;
- acentuación de las medidas tendientes a disminuir los medios de pago a través de mecanismos tales como la congelación de recursos de las corporaciones de vivienda, la agilización de pagos al exterior, la elevación de los costos de endeudamiento externo, el restablecimiento del encaje marginal del ciento por ciento, etc. Naturalmente, estas restricciones monetarias, en momentos en que se está dando un ensanchamiento gigantesco de los recursos financieros de los cafeteros y de los sectores a ellos vinculados, producen consecuencias desiguales sobre los distintos sectores de la economía, lo cual ha llevado a que el capital productivo se queje de la ausencia de créditos para las actividades manufactureras y, en general a que se produzca una disputa en torno a la asignación y distribución de los recursos (38);
- también con el propósito de encasillar la oferta moneta-

ria, se ha reducido la tasa de devaluación lo que, naturalmente, afecta las posibilidades de las exportaciones distintas al café. El ritmo de devaluación, que en 1975 había sido de 25.84 o/o, se redujo a 9.07 o/o en 1976 y seguramente será aún inferior en 1977. La lentitud de la devaluación estimula, por otra parte, el endeudamiento externo que, dada la actual integración mundial de las tasas de beneficio, ya venía siendo estimulado por razón de las diferencias entre las tasas reales de interés domésticas y las del exterior;

— Con las mismas finalidades, se han celebrado varios contratos de “congelación” de fondos entre el gobierno y los cafeteros (acuerdos de Noviembre de 1976 y del 1o. de Marzo de 1977), se ha constituido el Fondo Cafetero para el Desarrollo Nacional y, ya desde Junio de 1975, se habían creado los atractivos Títulos de Ahorro Cafetero (TAC). Se expidió también la conocida Resolución 25 de la Junta Monetaria por la cual se suspende transitoriamente la conversión a pesos de las divisas provenientes del café y de los “servicios”. Pero, las lecciones de todas estas medidas y de algunas otras relativas a los montos del reintegro y de la retención y a la renovación y ampliación de los convenios de salud y de la prestación de otros servicios públicos en las zonas cafeteras, son las siguientes: a) el común denominador de las disposiciones es su carácter monetario. Es decir, se impone al gremio cafetero una contribución en la campaña anti-inflacionaria; b) pero se preserva la titularidad de los recursos y no se intenta afectarlos directamente a finalidades productivas ni a fondos netamente públicos; c) los especuladores del café (intermediarios, exportadores particulares, etc.) han demostrado su habilidad para trasladar toda reducción en el precio internacional, en el precio interno y, en general, toda reducción de sus ingresos efectivos, a los productores del grano. Para ello cuentan con las condiciones del mercado (la inelasticidad de la oferta del grano en el corto

plazo, su posición de monopsonio, etc.) y con la colaboración de los fondos públicos manejados por la Federación. Esta última interviene en el mercadeo cada vez que los precios internacionales se tornan desfavorables y cede nuevamente el campo a los exportadores privados cuando los precios van en aumento; d) además del gigantesco crecimiento del capital especulativo en los últimos meses, las providencias gubernamentales han venido ampliando el rango de las operaciones legales del agio: la atractiva rentabilidad de los TAC, la posibilidad de obtener tasas de interés de hasta el 10 o/o mensual mediante el cambio de las divisas de los turistas, la manipulación de las tasas de descuento de los certificados de cambio cotizados en bolsa, etc. Ciertamente, estas nuevas posibilidades y, sobre todo, el colosal aumento de los recursos controlados por el capital especulativo bancario y extra-bancario, en medio de una situación altamente inflacionaria, restan, en el corto plazo, atractivos a la inversión productiva;

— Desarrollo de labores de supervigilancia directa sobre la etapa de distribución de productos, tanto para evitar su fuga hacia el exterior como para prevenir su acaparamiento interno. Estas labores asumen que una buena parte de la responsabilidad del proceso inflacionario debe recaer sobre los comerciantes. Estos han respondido airados, acusando a los organismos de distribución estatales de corrupción e ineficiencia y denunciando las posiciones monopolísticas de algunos renglones de la producción (39). Este nuevo escenario de mutuas acusaciones ha venido a realzar la incapacidad del Estado para coordinar y armonizar los intereses de las capas dominantes y para aguijonear los enfrentamientos entre las distintas fracciones del capital.

En fin, cuando se examina todo el abanico de medidas, resulta difícil tachar al gobierno de inconsistente en cuanto a

su representación preferencial de los intereses que se van erigiendo como hegemónicos. Tampoco sería legítimo sobrevalorar las diferencias entre el Ministro Botero y el Ministro Espinosa dada la coincidencia del carácter de clase de la gestión de uno y otro.

2.3. Los síntomas del tránsito de la unidad hacia la descomposición.

A lo largo de la agudización de la crisis interna del bloque en el poder, propiciada por el alza en los precios internacionales del café, López se ha obstinado en mantener el precepto de “la neutralidad oficial” frente a la bonanza. De acuerdo con las informaciones de prensa sobre las últimas manifestaciones del presidente a este respecto,

“El presidente Alfonso López Michelsen anunció ayer que el Gobierno será totalmente neutral ante el abanico de intereses particulares que pretenden disfrutar la bonanza cafetera y alabó la forma generosa como el gremio cafetero la está compartiendo con el resto de los colombianos. . .”.

“Reiteró su confianza en que todos los colombianos, en su momento oportuno, sabrán reconocer a los cafeteros el espíritu de desprendimiento — ya cristalizado en hechos concretos — que están demostrando en el compartimiento de sus ‘presuntas grandes ganancias’ con sus compatriotas y sin discriminación alguna” (40).

Pero, además, de ponderar el espíritu filantrópico de los cafeteros, como arquetipo del desprendimiento necesario para preservar la unidad nacional, López se ha valido de otros argumentos para impulsar la integración de los intereses opuestos de las fracciones del capital y para absorber y pre-

venir los movimientos populares mediante la ratificación de la ideología del Estado neutral-representante del bien común:

- 1) La crisis actual tiene un carácter eminentemente técnico; los instrumentos de conducción monetaria, cambiaria y fiscal han resultado insuficientes, pero el gobierno sigue cavilando sobre el reto que su adecuada manipulación plantea al intelecto. Esta presentación tiene la obvia ventaja de esfumar todo vestigio de clase. Como es de esperar, ha constituido el principal recurso del Ministro de Hacienda (41);
- 2) Solamente una meta ha forzado al gobierno a romper su neutralidad: la defensa del consumidor. El Ejecutivo no ahorrará esfuerzos ni encontrará barreras insalvables en esta lucha por defender los salarios reales de las clases trabajadoras, lucha que, por demás, representa los objetivos legítimos del movimiento obrero;
- 3) Ante la incredulidad de los sectores productivos, la descomposición del sector político y los levantamientos urbanos, los distintos ministros han venido apelando a toda la ciudadanía para que renueven su fé en el país y salven las instituciones democráticas (42).

Pero los esfuerzos gubernamentales por restablecer la unidad nacional no han alcanzado a conmover a los representantes del capital industrial ni ha logrado movilizarlos a respaldar incondicionalmente al presidente. Por el contrario, la burguesía manufacturera:

- 1) Ha hecho explícitas, en repetidas ocasiones, sus contradicciones con los cafeteros y con el capital bancario y ha sugerido sus dudas sobre la capacidad de López para cohe-

sionar a todas las clases dominantes. Así, la ANDI decía a mediados de Abril:

“Las medidas se han quedado cortas, pues parecerían que están destinadas apenas a paliar unos problemas urgentes, producto de la coyuntura económica, sin mirar más lejos. . .

“ ... en el seno del gobierno no hay homogeneidad en la conducción de la política económica y, como si lo anterior fuera poco, se dan marchas y contramarchas, derogando hoy lo que se implantó ayer ...

“ ... hasta el momento no ha existido la publicitada política concertada entre el Gobierno, los gremios económicos y las centrales sindicales para analizar los múltiples problemas que se presentan a diario ...

“En materia crediticia, la industria —en todos sus niveles— requiere, al igual que la ganadería y la agricultura, de créditos rápidos, flexibles y libres del atiborrante papeleo que enmarca hoy su obtención” (43).

Además, tanto la ANDI como ACOPI han venido denunciando la falta de programas de estímulo a la producción y en este empeño han sido secundados por los editoriales de El Espectador (44). FEDEMETAL, por su parte, ha propugnado por la eliminación de la dependencia del café mediante el impulso de grandes proyectos de desarrollo industrial y ha requerido a los candidatos presidenciales para que definan sus programas de apoyo a la industria manufacturera (45). Ante estas reclamaciones, el gobierno no solamente insiste explícitamente en sus políticas de no-intervención (46) sino que además amenaza a los grandes monopolios industriales por su papel en la inflación actual (47);

2) Ha venido presentando soluciones económicas, diferen-

tes a las adoptadas por el gobierno, que de una u otra manera canalizan beneficios de la bonanza hacia la producción interna. Estas elaboraciones desconocen entonces el carácter meramente técnico de la crisis. A manera de síntesis, los principales recursos diseñados por la burguesía industrial a través de sus representantes gremiales o aún de los partidos políticos han sido las siguientes:

a) "Sembrar" la bonanza mediante la canalización de sus ingresos y de las divisas que viene dejando a la economía a través de programas crediticios y de estímulos fiscales para los productores. Ha sido la propuesta de FEDEMÉTAL, de Virgilio Barco, de Agudelo Villa y de otros (48);

b) Tanto el candidato Agudelo Villa como ANIF han venido reclamando un mayor control público de los fondos provenientes de las exportaciones del café o aún del mercadeo internacional del grano (49). Su propuesta tiene gran actualidad por cuanto los contratos entre el gobierno y la Federación vencerán en 1978 y los enfrentamientos entre la burguesía industrial y los exportadores cafeteros serán entonces particularmente notorios;

c) Otros voceros han defendido la implantación de un diferencial cambiario que afecte a los cafeteros y preserve los estímulos de la tasa de cambio para las exportaciones manufactureras (50). Esta propuesta ha sido complementada por múltiples exigencias de restablecimiento del incentivo a las exportaciones no tradicionales conocido como CAT (51).

d) Los más resignados se han limitado a demandar la apertura de líneas de crédito para los sectores exportador, agropecuario e industrial que vienen siendo afectados por las medidas contraccionistas (52);

e) Como puede esperarse, el capital productivo ha rechazado también la liberación de las importaciones. Reclama, por el contrario, protección, crédito, reducción de sus tributos, subsidios y estímulos para exportar (53).

Claro está que, paralelamente a las reivindicaciones exigidas por el capital productivo, se oyen también voces resignadas a la relegación del capital nacional, que prefieren limitarse a controlar el problema inmediato de la inflación, así sea a costa del malgasto de las divisas. Tal es, por ejemplo, la recomendación de abolir total o parcialmente el control de cambios y el estatuto cambiario que ha sido formulada por la Asociación de Exportadores Cafeteros, por la Asociación Bancaria y por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (54).

3. LA DESCOMPOSICION DE LA CLASE POLITICA

El cretinismo parlamentario, partidista y burocrático ha sido la manifestación más palpable de la actual crisis. Sin embargo, la descomposición interna de la clase política no podría concebirse, en el caso colombiano que nos ocupa, haciendo abstracción del recrudecimiento de las contradicciones no-antagónicas en el interior del bloque. Es decir, la campaña de estéril destrucción en que se encuentran empeñados los sectores políticos no se habría dado si el gobierno hubiera demostrado capacidad de cohesionar a las clases dominantes, a través de programas y políticas que armonizaran sus intereses. Porque, en tal hipótesis, las críticas de la oposición burguesa al gobierno habrían tenido que restringirse al plano moral y habrían chocado con la difícil defensa de un bloque solidario alrededor del Ejecutivo. La incapacidad gubernamental, en momentos de disputa de la hegemonía, ha permitido, por el contrario, que el debate de las agrupa-

ciones políticas se traslade del plano de lo personal al estudio de la capacidad asociadora de la Administración tanto respecto de las clases que se distribuyen al excedente social como respecto de las clases subordinadas. De allí que las raíces de la crisis se remonten a todo el andamiaje institucional (y no solamente a la persona del presidente) y que la inestabilidad haya alcanzado, en esta ocasión particular, síntomas de gravedad desconocidos en los últimos años.

No obstante lo anterior, el desequilibrio de la clase política goza de una autonomía relativa frente al conjunto de las vicisitudes actuales y las acrecienta de una manera específica. Esta especificidad se debe, en este caso, no solamente a la autonomía del vano mundillo político sino también a la proximidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Esta última circunstancia "per se" despierta ambiciones electorales personales y repercute en mutuas acusaciones, en campañas de auto-destrucción, en agitación permanente de las banderas partidistas, etc. Al mismo tiempo, la cercanía de los comicios exige que el desconcierto político mire hacia las elecciones como artificio de salvación o, por el contrario, que se acelere la solución no-democrática de la crisis anticipándose a la fecha electoral.

De allí que sea imperativo detenerse un poco en las características generales de la desintegración de la clase política para pasar luego a examinar las posibles salidas del bloque. De manera enumerativa, podría decirse que las particularidades del cretinismo parlamentario actual están dadas por:

3.1. Desconfianza de la capacidad del Presidente y sospechas éticas sobre su conducta.

Los careos entre las agrupaciones políticas han girado en

torno de la persona del presidente. Hasta el punto de que la primera clasificación de los bandos que viene a la mente tiene como criterio de distinción el colocarse del lado del presidente o en contra de él. La corriente turbayista estaría dando un apoyo irrestricto al Jefe del Ejecutivo; el alvarismo estaría transitoriamente con López pero mantendría su propensión a abandonarlo tan pronto como la imagen presidencial atravesara un cierto límite invisible de declinación; los ospino-pastranistas se definirían por su abierta pugnacidad con la persona del presidente y el llerismo jugaría a la posición autónoma y prudente dentro de este conflicto.

Ahora bien, resulta indudable que el liderazgo del Jefe del Estado está siendo considerablemente afectado. De hecho, López ha mostrado debilidad en multitud de flancos: a) en la pulcritud en el manejo de los fondos públicos, a través del problema de las carreteras a Los Llanos y a San José de Suaita, de la delimitación de La Orinoquía para efectos de exenciones tributarias, de los créditos en los bancos oficiales, etc.; b) en el desprestigio de los símbolos del tecnocratismo y de la legalidad mediante la justificación técnica y jurídica (toda la discusión sobre el carácter público o privado de Federacafé) de operaciones realizadas en provecho propio y de su familia; c) en el decaimiento de la efigie presidencial como emblema de la neutralidad, la tolerancia pluralista y la ecuanimidad, con ocasión de sus enfrentamientos personales con A. Espinosa V., con Lucas Caballero, con el Procurador, con todos los tecnócratas del ospino-pastranismo y, sobre todo, con la destitución del Superintendente Bancario, públicamente asociada a la venganza de López contra la integridad y firmeza del funcionario subalterno; d) en el deterioro del modelo de legitimación presidencial y estatal en virtud de la omnisapiencia y la imparcialidad del Jefe del Gobierno por razón del carácter manzanillesco y oportunista de sus más enconados defensores y de las mani-

pulaciones bastardas de López para acallar a sus detractores y promover su impunidad pública (55); e) en fin, por los cuestionamientos de su erudicción y de su habilidad para integrar los disímiles intereses de los ciudadanos, debidos al desbordamiento inflacionario y a la diáfana asociación de sus móviles personales con los intereses de los cafeteros (contratos de la Federación de Cafeteros con su hijo, defensa jurídica del contrato por parte del Comité Nacional de Cafeteros, etc.).

La condensación del conflicto capitalista-partidista en la persona del Jefe del Estado no es aleatoria, así como tampoco lo es la trascendencia que ha alcanzado la crisis. Es que en el estadio monopolista del capital se da una transformación en la forma de gobierno, es decir, en la manera particular como se relacionan el Legislativo y el Ejecutivo, que termina por operar un desplazamiento de la jerarquía institucional en favor del último de ellos. Naturalmente, esta transformación obedece a variaciones en las relaciones de poder entre las clases y, específicamente a: a) el avance del capital monopolista y la dificultad de esta fracción para imponer su hegemonía dentro del parlamento, debido al desarrollo desigual de las regiones representadas en el Congreso y a rezagos y tradiciones electorales que impiden una readecuación del Legislativo en el corto plazo; b) a la necesidad de construir nuevas formas de intervención de lo político dentro de lo económico, lo que es apenas una consecuencia de los acoplamientos anteriores. En fin, lo que interesa de manera inmediata para el presente análisis es:

a) El Estado colombiano ha venido experimentando una reestructuración de la forma de Estado que fortalece y agiganta al Ejecutivo. Esta reestructuración se ha dado principalmente mediante las reformas administrativas de 1958, 1963 y 1968 y, de manera especial a través de la enmienda constitucional del 68;

b) Como consecuencia de esta metamorfosis en los aparatos estatales, la Rama Administrativa ha pasado a ser el centro aglutinador del poder público y el nódulo de condensación de las luchas entre las clases dominantes. Además, el Presidente, como Jefe del Estado, ha pasado a personificar el poder;

c) También como resultado de las modificaciones orgánicas del Estado, la actividad de los partidos burgueses ha pasado a ser una función dependiente de su participación o no participación en la Administración Pública y de su relación con ésta;

d) Otra secuela importante consiste en la dificultad del Ejecutivo para lograr posiciones homogéneas y expresiones unívocas. Es decir, la Administración, como lugar que es de concentración del poder y de las luchas de fuerzas contrapuestas tiene ahora, paradójicamente, menos autonomía FRENTE A LAS CLASES DOMINANTES que en las formas previas del Estado capitalista burgués;

e) Finalmente, el ascenso del capital monopolista impone también modificaciones en cuanto al foco de la legitimación del Estado y en cuanto a las modalidades legitimantes: el Ejecutivo, y particularmente la figura del presidente, pasa a ser el núcleo de representación de la unidad nacional (desplazando al Congreso en esta función). Y lo hará a través de la imparcialidad, neutralidad y generalidad que otrora se exigían del Parlamento, pero también mediante la implantación de los principios de la planificación y del tecnicismo que resultan ahora esenciales para el predominio de las necesidades del capital monopolista dentro de las políticas públicas.

Las consideraciones anteriores explican la orientación de la crisis hacia el Ejecutivo y hacia la persona del presidente y la

gravedad que ella ha alcanzado. Sencillamente, se está tocando la institución central de la dominación y la coordinación capitalistas.

Así se entiende también la importancia de extender los ataques, tal como ha ocurrido, a otras personalidades del andamiaje ejecutivo: Acusaciones de corrupción a los Ministros de Desarrollo, al Ministro de Agricultura, al Alcalde en propiedad y al Alcalde interino de la capital, etc.

3.2. La crisis invade las otras Ramas del Poder Público.

Precisamente esa posición de primacía del Ejecutivo está impidiendo, en el caso colombiano actual, una solución a la inestabilidad por la vía del Parlamento. Porque, tratándose, como se trata, de una crisis de hegemonía, el Congreso no puede sustraerse a la lucha entre las fracciones del capital que encuentran en el recinto legislativo otro escenario de batalla. Si además se tiene en cuenta que, por razones tan aleatorias como el oportunismo electorero, las mayorías parlamentarias se identifican con las posiciones públicas y privadas del presidente, resulta claro que el Congreso corre, en mayor o menor grado, la misma suerte del presidente (56).

La identificación de los representantes y senadores con las políticas y actitudes del Ejecutivo adiciona un doble ingrediente a la descomposición política del régimen:

a) Se desvanece la idea de un control externo al Ejecutivo, emanado de los órganos de representación popular. En otras palabras, se origina simultáneamente una doble duda: De una parte, sobre la representatividad del Congreso y sobre la utilidad de las elecciones y, de otra, sobre la ética de la

casi-totalidad del aparato estatal. Con mayor razón si se tiene en cuenta que otra de las instituciones públicas de supervisión, la Procuraduría General, también se vio envuelta inicialmente en las acusaciones y resultó igualmente tachada y ridiculizada por la prensa;

b) Se cierran aún más las posibilidades de remozamiento del régimen democrático-burgués a través de una vigorosa acción parlamentaria. Solamente van quedando abiertas las puertas de la revitalización de la persona del presidente a través del Designado o de las elecciones o la salida excepcional de la dictadura militar.

3.3. Los partidos burgueses: Desintegración y descrédito del sector político

Ciertamente, las distintas corrientes de los dos partidos políticos burgueses, dominadas por sus ambiciones electorales, se han enfrascado en una batalla de acusaciones mutuamente destructivas. Este escenario campal ha realzado el oportunismo árido de las directivas de las dos agrupaciones, y su ciego personalismo, su miopía frente a los intereses comunes del bloque, su incapacidad de elaborar programas y construir plataformas que coordinen los intereses de las clases dominantes y cautiven a las masas populares. Es, como lo dice uno de los periódicos burgueses, la distracción en lo secundario y particular, con abandono de lo principal y general:

“Hoy tenemos la lucha de clases más que la lucha de los partidos. Por eso, se dividen entre quienes quieren acabar el sistema y quienes quieren acabarlo. Entonces, el tema de cómo hacer la paz entre liberales y conservadores, no tiene ya actualidad, sino cómo ven-

tilar el debate entre los amigos del statu quo y quienes aspiran a un orden distinto' . . ."

"La consideración transcrita . . . es a nuestro modo de examinarla y de pensar en sus alcances, digna de juiciosos estudios, entre otras cosas para ver de sacar las polémicas partidistas actuales y ya venideras, de lo meramente secundario o personalista en que tontamente se consumen . . ."

"Por desgracia, lo real y auténtico, es que estamos todos — unos y otros — asomados al abismo, como si no nos diéramos cuenta del inminente riesgo . . . De modo que los horizontes, no lejanos sino próximos, se oscurecen hora tras hora, y no habrán de despejarse si no se logra un nuevo alindamiento partidario, como el sugerido por el Presidente, según sus citadas sentencias, naturalmente comenzando por nuestro liberalismo, que por más obcecado que se halle en sus enfrentadas diferencias individualistas, tiene que hacer toma de conciencia de sus deberes, y aunque ya no sea fácil unificarse en lo eleccionario, que al menos entienda la urgencia de congregarse en torno de quien multitudinariamente fue elegido por sus masas a la máxima jerarquía republicana y cuya suerte va lógicamente integrada a la misma del partido, y todavía más: a la misma de la democracia en Colombia. Pues es esto lo que se pone en grave trance cada vez que nos olvidamos del país y de su sistema. Es decir, de su destino"(57)."

" . . . como alguna vez lo dijo el doctor Eduardo Santos, en patriótico llamamiento, muy atinente a lo que hoy nos ocurre, 'si es lógico y necesario que los partidos luchen con justificada ardentía por imponer en la vida de la nación determinados principios o por llevar a la legislación ciertas normas de vida, es justo y conveniente que ello se practique con muy elevado

criterio de solidaridad nacional, y con el propósito firme de asegurar, por encima de las discordias partidistas, la convivencia entre los colombianos. 'Palabras de oro, que quizás aún hallen eco en el corazón de dirigentes y dirigidos.'"(58).

Esa necedad partidista adiciona también sus propios leños a la hoguera de la descomposición:

a) Fundamentalmente, porque los partidos burgueses desempeñan importantes funciones en la armonización de las clases dominantes y en la desorganización de las clases explotadas y, en consecuencia, se hace difícil encontrar instituciones sustitutivas que ocupen el lugar de los partidos dentro de la anatomía social;

b) Porque, al igual que el Estado, los partidos dominantes predicán una retórica anticlasista o un perifrasedo del conflicto -integrador- funcionalista a través de los cuales se vincula a las clases dominadas a la unidad nacional. Pero, a diferencia del Estado, los partidos burgueses pueden representar de preferencia los intereses de clases o fracciones no hegemónicas, ya sea que se hallen en la ruta del ascenso o que se encuentren en proceso de derrota. Por este camino, los partidos contribuyen a la imagen del pluralismo político y a la ideología de la libertad y de la igualdad;

c) Porque, siendo partidos de ideología burguesa, cuentan con afiliación múltiple de patronos, profesionales independientes, pequeña burguesía tradicional, proletarios, empleados públicos, etc. y llegan inclusive a tolerar dirigentes no solo de extracción burguesa sino también pequeño-burguesa y hasta obrera. Además, cuentan con activistas de las clases trabajadoras urbana y campesina, todo lo cual reitera los pilares ideológicos del Estado capitalista y liga las

clases populares a la ideología del contrato social;

d) Porque los partidos dan expresión a las aspiraciones reivindicativas de todas las clases sociales.

De allí la trascendencia del canibalismo partidista de los últimos meses.

Sin embargo, se exageraría si se dijera que el horizonte solo presenta escenas de empecinada auto-destrucción. No. Paralelamente a la lid personalista, van apareciendo plataformas prudentes y reflexivas que avivan la fe en la vía electoral como rumbo de superación de la crisis política-institucional del bloque. El candidato Agudelo Villa elabora cuidadosos programas que recogen la ideología libertaria de los pequeños propietarios (59). Aunque su candidatura carece de toda posibilidad en una formación donde del capital monopolista ya ha impuesto su dominación, no hay que subestimar su papel integrador de numerosas capas pequeño-burguesas y obreras que amenazaban con volarse del redil. También las corrientes alvarista y llerista formulan, cada una a su manera, sus proyectos conciliadores y sus estrategias monopolistas. El llerismo comienza a hacerlo bajo la ambigüedad de las posiciones social-demócratas y de ellas participan, en mayor o menor medida, muchos de los ideólogos del ospino-pastranismo (60). El alvarismo, por su parte, pregona abiertamente el sistema de la libre empresa respaldado por el Estado que interviene para asegurar una cierta tasa de ganancia (61). Y aún el turbayismo, pese a la impotencia teórica de sus directivas, apela también a la unidad de todos los estratos de la Nación y propone un continuismo del *laissez-faire* lopista cualificado en lo que a estímulos para la transformación del agro y de la ganadería se refiere (62). Y, naturalmente, el velado candidato, Belisario Betancour, él también, apela a los instintos de sal-

vacación de los sectores políticos y llama a la solidaridad nacional:

“Es hora de hacer un alto en el camino de los intereses puramente políticos, de grupo o personalistas, y pensar en el pueblo colombiano, que padece y seguirá padeciendo por algo de lo que es culpable.

“Lo único que pido hoy es que recuperemos la serenidad, que pensemos primero en Colombia y en los colombianos, y que analicemos con honestidad y con lucidez lo que puede estar a punto de perderse si se continúa por la ruta que estamos siguiendo” (63).

NOTAS

- (1) Las dos centrales produjeron repetidas profesiones de fe en el gobierno a lo largo de todo el mes de Abril (El Tiempo, 1o, 16 y 29 de Abril de 1977).
- (2) Tal como ocurrió con la exhortación de la CTC a las organizaciones sindicales del puerto de Buenaventura que venían exigiendo modificaciones de la convención recientemente firmada, durante la suspensión de labores en el puerto en el mes de Abril.
- (3) Ver al respecto El Siglo, 18 de Abril, 1977. También, con ocasión del "día del trabajo", el Ministro pudo decir: "Ninguna fecha más propicia que ésta para hacer público reconocimiento de la colaboración que la clase obrera ha prestado al gobierno del presidente López" (El Espectador, 30 de Abril, 1977).
- (4) Lo que ha originado el enfrentamiento entre el Ministro y los representantes del capital. La ANDI viene quejándose de la ausencia de una política laboral general y denunciando el abandono de los proyectos de reforma de los Códigos del Trabajo y las exageradas concesiones que los mediadores del gobierno han venido apoyando en los recientes conflictos colectivo de Paz del Río, Ecopetrol, Cervunión, etc. También el Consejo Colombiano de Usuarios del transporte y el Cafetero Gilberto Arango L. han protestado por el sentido de la intervención del delegado del Ministerio en el conflicto de Puertos de Colombia, Terminal Marítimo de Buenaventura (El Espectador, 20 de Abril, 1977; El Siglo, 4 de Mayo, 1977). Ciertamente, la política laboral de López ha variado bastante de la de Ministro de Crovo al Ministro Montoya: las intervenciones actuales son coyunturales, temerosas, tímidas, pusilánimes. Pero esta mutación está determinada por la crisis de inestabilidad que experimenta el gobierno y no por las inclinaciones particulares de uno y otro Ministro.
- (5) El Tiempo, 7 de Abril, 1977; El Siglo, 7 de Abri. 1977.
- (6) La República, 8 de Mayo, 1977.
- (7) Los salarios de los trabajadores del Estado presentan las tasas más bajas de crecimiento entre los distintos grupos salariales (BERRY, A. y URRUTIA, M. La distribución del ingreso en Colombia. La Carreta, Medellín, 1975).
- (8) Sobre este tema se volverá más adelante en este capítulo, al examinar la intervención estatal para contrarrestar la baja tendencial de la tasa de ganancia y en el Capítulo Tercero, dentro del tema de la Asamblea Constituyente.

- (9) La UTC se ha opuesto a la adscripción del servicio de salud al Ministerio de Salud. Asmedas, por su parte, ha definido claramente su contraposición con la propuesta de división formulada por el gobierno y con las nuevas sugerencias divisionistas que vienen planteando ANDI, ANIF, FENALCO y FASECOLDA. Los médicos han planteado la integración de toda la seguridad social en un nuevo Ministerio. Hay que advertir, además, que UTC y CTC sí dieron su respaldo a las proposiciones de "privatización" de la medicina impulsadas por tales entidades representantes del capital.
- (10) Tal es el principal mensaje, en materia de reestructuración de la seguridad social, del documento elaborado por ANDI-ANIF y suscrito por éstas asociaciones y por FENALCO, FASECOLDA, ASOBANCARIA, UTC y CTC que fue remitido a la Comisión Séptima del Senado a comienzos del año en curso. En el mismo sentido se expresó recientemente CONFECAMARAS, sugiriendo la necesidad de desmontar total o parcialmente la actual estructura del ICSS (El Tiempo, 19 de Abril, 1977).
- (11) Sobre este punto, el Presidente de la Federación Médica, proponía una nueva e híbrida figura ("empleados semi-oficiales de derecho social") que situaría a los médicos del Seguro Social entre los empleados públicos y los trabajadores oficiales (El Tiempo, 27 de Abril, 1977; El Siglo, 6 de Mayo, 1977).
- (12) De acuerdo con la información preliminar sobre los resultados del foro contenida en La República, 9 de Mayo, 1977.
- (13) El próximo 27 de julio vencerán las facultades extraordinarias concedidas por el Congreso al Presidente para que reestructurara el ICSS. Los Ministerios de Salud y del Trabajo han anunciado que se vienen realizando estudios sin que hasta el momento se conozcan el contenido de los mismos. (El Siglo, 6 de Mayo, 1977).
- (14) El Siglo, 18 de Abril, 1977. También frente al Estatuto Docente (Decreto 128 de 1977), otro de los puntos neurálgicos del actual enfrentamiento gobierno-Fecode, el Ministro ha sido evasivo e indeciso. Al igual que en el caso de los médicos, lo que está en juego en dicho estatuto son las condiciones de lucha reivindicativa autorizadas por el Estado y, también como en el caso de los facultativos, la tendencia del gobierno es negar a los maestros la estabilidad en el empleo y las vías legales de la negociación colectiva.
- (15) El Tiempo, 13 y 29 de Abril, 1977; El Espectador, 14 y 30 de Abril, 1977.
- (16) El Tiempo, 2 y 13 de Abril, 1977.
- (17) ROJAS, F. Criminalidad y Constituyente, Bogotá, Cinep, 1977.

- (18) Editorial de Alvaro Gómez en *El Siglo*, 13 de Febrero, 1977. En el mismo sentido, ver su editorial del 30 de Abril de 1977 (*El Siglo*). Los militares, por su parte, han venido criticando la ineficiencia de la justicia penal ordinaria y comparándola desfavorablemente con la eficacia de los procedimientos militares de juzgamiento y aprehensión. *El Siglo*, a su turno, hace eco a los auto-elogios de las fuerzas armadas al concluir que la parálisis de la jurisdicción penal se debe a la carencia de una auténtica policía judicial hoy en día encargada al F-2 de la policía Nacional y al DAS (declaraciones del General L. C. Camacho Leyva en el aparte de televisión "La pelea es peleando", 30 de Abril, 1977; editorial de A. Bermúdez en *El Siglo*, 4 de Abril, 1977).
- (19) La posición del gobierno consta en las distintas sugerencias sobre los proyectos que el Ejecutivo querría presentar ante la próxima Asamblea Constituyente (*Controversia*, 50-51). Las proposiciones liberales han sido formuladas en los editoriales principales de *El Tiempo* (5 de Noviembre, 1976 y 7 de Abril, 1977) y de *El Espectador* (8 de Noviembre, 1976).
- (20) Como ejemplos pueden citarse las recientes "tomas" de las poblaciones de San Andrés y Las Claras (FARC) y de San Isidro (ELN). *El Tiempo*, 13 de Abril y 6 de Mayo 1977; *El Siglo*, 5 y 7 de Mayo, 1977.
- (21) Orientación que se une con las políticas de fomento a la "educación media" y a la "educación técnica", con la incapacidad de absorción de trabajadores intelectuales de parte de la economía, con las fuerzas hacia la proletarianización de una buena parte de la intelectualidad, etc., todo lo cual debe tenerse en cuenta aunque no es del caso ahondar en estas páginas.
- (22) Claro está que su extensión al sector productivo y aún su prolongación en el tiempo dentro del sector estudiantil pueden no ser tan fácilmente implementables como lo ha sido hasta el momento la permanencia de agentes en la universidad. Todo depende de la lucha que se ocasione y que se libere frente a estas medidas. Pero quizás esta visión futurista no cuenta mucho dentro del abanico de alternativas que por esta época contemplan los representantes del capital y los agentes de la dominación.
- (23) Entendiendo por burguesía interior aquella que: a) es incapaz de confrontar y derrotar al capital internacional y, por el contrario, se encuentra articulada a éste y depende de él; b) no obstante, dispuesta con los monopolios foráneos la distribución de la plusvalía social, solicita el respaldo del Estado busca reservarse algunos sectores, etc.
- (24) De acuerdo con los estimativos del Gerente de la Federación de Cafeteros (*El Siglo*, 29 de Abril, 1977).

- (25) Se citan los dos factores de prevención de la inversión forastera que primero vienen a la mente. Naturalmente, una elaboración más cuidadosa requeriría de un estudio especial que, por el momento, excede los límites de este trabajo.

Cuando se habla de las garantías políticas para el capital extranjero se piensa que, entre otras razones, la llamada ley de "colombianización" de la banca pudo haber atemorizado inicialmente a algunos inversionistas. A la postre, sin embargo, la ley ha aparecido como ventajosa para los bancos extranjeros.

- (26) Aunque los años del gobierno de López no han sido particularmente desfavorables para la inversión foránea. De hecho, su participación relativa en todas las actividades económicas ha continuado elevándose (Banco de la República. División Análisis Económico. Oficina de Cambios. "Participación Extranjera". Diciembre, 1976).
- (27) De allí que en 1976 se haya observado un crecimiento del producto industrial de 10.8 y se espere para 1977 una tasa que se ubicaría entre 11.4 y 12.6 (Coyuntura Económica, Vol. VII, No. 1, Mayo de 1977, Cuadro I-1).
- (28) Tales como los que se vienen contemplando ahora (Mayo de 1977) mediante el fortalecimiento y la agilización del Fondo Financiero Industrial y la reducción de las tasas de interés del mercado bancario.
- (29) De allí que no se comparte el optimista pronóstico de Desarrollo, en materia de crecimiento de la inversión industrial en 1977 según el cual el crecimiento del sector será de alrededor del 12 o/o (Coyuntura Económica, Vol. VII, No. 1, Mayo de 1977, pp. 15 ss).
- (30) Para una descripción de las vinculaciones entre los intermediarios financieros colombianos y el capital externo, ver Controversia, No. 52. Resulta difícil ir más allá en el análisis por razón de la carencia de estudios sobre el capital bancario y sobre sus conexiones con la industria nacional.
- (31) Esta ha sido una presentación supremamente sintética de la llamada ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia y de sus repercusiones sobre la forma del Estado y la esfera de sus actividades. Quien desee seguir en detalle la elaboración teórica y los debates que se vienen librando en torno a este tema puede servirse de MATTICK, P. Marx y Keynes. México, D.F. Ediciones Era, 1975; VINCENT, J.M. et. al. L'Etat Contemporain et le marxisme. París, Eds. F. Maspero, 1975; MANDEL, E. "The industrial cycle in late capitalism", New Left Review, 90, Marzo-Abril, 1975, pp. 3 - 25; HODGSON, G. "The Theory of the falling rate of profit", New Left Review, 84, 1974, pp. 55 - 82; WARREN, B. "Capitalist planning and the State", New Left Review, 72, Marzo - Abril, 1972, pp. 3 - 29.

- (32) Tal es, por ejemplo, la observación de Coyuntura Económica (Vol. VII, No. 1, Mayo de 1977) recogida escandalosamente por La República (11 de Mayo, 1977) bajo el denigrante título de "Fracasa política de precios y salarios". Al respecto había dicho Coyuntura Económica: "Ante la inoperancia de los mecanismos de control monetario empleados durante 1976. . . , se han reforzado los controles monetarios y se han multiplicado las disposiciones, no siempre internamente consistentes, ni coherentes con el Plan de Desarrollo, encaminadas a tal efecto".
- (33) Lo que no implica que la coherencia o incoherencia teórica sea indiferente para el capital. De una parte, el juego a la conformidad lógica recubre ágilmente el contenido político de las medidas de un hábito tecnócrata que eleva las divergencias internas del bloque al plano académico, mitigando así los efectos de descomposición de la disconformidad. De otra parte, la mutación frecuente en los principios económicos que anima la gestión gubernamental afecta la predictibilidad de las condiciones de producción y de mercado. De allí las recientes críticas de los gremios a las contradictorias y coyunturales variaciones en las regulaciones económicas: "Todos los días tenemos reglamentaciones diferentes, cambios de política que hacen inestable cualquier posibilidad de inversión. Yo creo que todos vivimos constantemente con un estado de zozobra, en la parte del desarrollo económico del país". (Declaraciones de R. Arbeláez, Presidente de la Asociación Nacional de Exportadores en El Siglo, 25 de Abril, 1977).
- (34) El ex-ministro de Hacienda, R. Llorente viene impulsando esta línea crítica a través de sus comentarios, aparecidos en el diario La República y en la Revista Guión.
- (35) El análisis general no parece alterarse por razón de que se hubiera revertido ligeramente la tendencia a la disminución del estímulo a partir de 1977 ni tampoco por los resultados favorables de las exportaciones no tradicionales en 1976. En realidad, la reversión de la medida es tan marginal que no merece mayor consideración. De otro lado, los resultados esperados para 1977 se colocan por debajo de las tasas de crecimiento alcanzadas en 1976 y de todas maneras puede afirmarse que los registros de exportación de productos distintos al café habrían sido superiores de no haber sido por el impacto de la reducción del CAT. (Ver, a este respecto, Coyuntura Económica, Vol. VII, No. 1, Mayo 1977, pp. 74 ss; también las declaraciones del presidente de ANALDEX en El Siglo, 25 de Abril, 1977).
- (36) Ya frente a la hiperinflación presente, el gobierno ha intentado solucionar la escasez de alimentos, que como se anotó tiene raíces estructurales, mediante estímulos fundamentalmente crediticios para los cultivos de pan coger (maíz, frijol yuca, plátano, etc.) Así, se han reducido los intereses de los préstamos dirigidos hacia los cultivos tradicionales y se ha anunciado la financiación de hasta el 100 por 100 de las solicitudes (El Tiempo, 10 de

Mayo, 1977). La agro-industria se queja entonces de la falta de programas y estímulos para la producción y del sucesivo viraje estatal hacia políticas discriminatorias contra el algodón, el azúcar, etc. (ver declaraciones del presidente de la SAC en El Espectador, 30 de Abril, 1977); los agricultores en general denuncian la insuficiencia de los nuevos estímulos, la imposibilidad de sustituir cultivos en el corto plazo, la ausencia de una política estable de precios de sustentación, la carencia de controles efectivos sobre la destinación real de los créditos, etc. (Ver, por ejemplo, La República, 11 de Mayo, 1977 y El Espectador, 10 de Mayo, 1977).

- (37) Ver, por ejemplo, las declaraciones de CAMACOL en El Tiempo, 14 de Abril, 1977, en El Siglo, 26 de Abril, 1977 y en La República, 9 de Mayo, 1977.

Por otra parte, aunque el presupuesto inicial del Estado para 1977 prevé un considerable aumento en las asignaciones correspondientes al Ministerio de Obras Públicas, habrá que esperar la ejecución presupuestal y las operaciones efectivas de tesorería para formarse una idea cabal de la política gubernamental en esta materia.

- (38) Ver, por ejemplo, las declaraciones de ACOPI en El Tiempo, 21 de Abril, 1977.

- (39) Tanto el presidente nacional de FENALCO como la dirección regional de esta entidad en Barranquilla han venido haciendo las imputaciones. Por su parte, el gobierno, a través del Ministro de Salud y del gerente del IDEMA y los industriales, a través del presidente de FEDEMÉTAL, se han empeñado en refutar a FENALCO.

- (40) El Tiempo, 23 de Abril, 1977.

- (41) Y ha sido reproducida por El Tiempo, en su afán de salvaguardar al presidente y a la forma de Estado (ver, por ejemplo, el editorial del 9 de Mayo de 1977).

- (42) Ver, por ejemplo, las declaraciones del Ministro de Gobierno y las intervenciones del Ministro de Relaciones Exteriores con ocasión del debate sobre la moralidad del presidente desarrollado en el Congreso Nacional (El Siglo, 18 y 22 de Abril, 1977). También los recientes llamamientos del Ministro de Agricultura a los empresarios agrícolas (La República, 9 de Mayo, 1977).

- (43) Declaraciones del presidente de la ANDI en El Tiempo, 14 de Abril, 1977.

- (44) Para las declaraciones de la ANDI y ACOPI, ver El Tiempo, 9 de Febrero y 13, 14 y 21 de Abril, 1977. Además, El Espectador, 11 y 12 de Abril, 1977.

- (45) La República, 24 de Enero, 1977; el Pueblo, 24 de Enero, 1977; El Tiempo, 26 de Abril, 1977.
- (46) Ver declaraciones del Ministro de Desarrollo en El Espectador, 15 de Abril de 1977.
- (47) "Advertencia" del Ministro de Hacienda a los monopolios, en El Espectador, 16 de Abril, 1977.
- (48) Para la posición de FEDEMETAL, ver El Pueblo, 24 de Enero, 1977. Para las sugerencias de Barco, El Tiempo, 23 de Abril, 1977. Para las cuidadosas elaboraciones de Agudelo Villa sobre esta materia, El Espectador, 1 - 9 de Febrero, 1977 y 23 de Abril, 1977; también El Tiempo, 12 de Febrero, 1977. Lleras Restrepo, siempre más cauteloso y evasivo, parece participar de esta línea de acción (ver, por ejemplo, El Espectador, 4 de Mayo, 1977).
- (49) Para las proposiciones de ANIF, ver La República, 25 de Febrero, 1977. Esta posición ha sido también compartida por P. Salazar de Heredia (La República, 7 de Febrero, 1977).
- (50) Ver, por ejemplo, las propuestas de P. Salazar de H. en El Siglo, 7 de Febrero, 1977.
- (51) Así lo ha venido reclamando incansablemente ANALDEX (Ver, por ejemplo, La República, 3 de Mayo, 1977). También lo ha impulsado el ex-presidente de la ANDI, L. Prieto O. (El Espectador, 8 de Febrero, 1977). En el mismo sentido se ha expresado el presidente de la firma textilera Coltejer (El Colombiano, 18 de Marzo, 1977).
- (52) Preocupación expresada por DIRIVENTAS (El Siglo, 26 de Febrero, 1977).
- (53) Ver, por ejemplo, las protestas y requisiciones de la SAC en El Tiempo, 22 de Febrero, 1977.
- (54) Así lo han aconsejado G. Arango L., presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Café (El Siglo, 10 de Enero, 1977), E. Wiesner D., Vicepresidente de la Asociación Bancaria (El Tiempo, 18 de Enero, 1977), E. Samper P. de ANIF (La República, 25 de Febrero, 1977) y aún lo sugiere FEDESARROLLO (Coyuntura Económica, Vol. VII, No. 1, Mayo de 1977, p. VIII). Los investigadores de esta última institución parecen simpatizar también con la propuesta del ex-Ministro García Parra de revaluación con devaluación progresiva cuyos efectos políticos resultan, sin embargo, difíciles de estimar.
- (55) Que estas destituciones tocaban uno de los pilares fundamentales de la justificación del Estado actual y uno de sus mecanismos estructurales para in-

tegrar a las diversas capas del capital, resulta claro de la reacción que ocasionaron en los editoriales del periódico gobiernista (El Tiempo, 20 de Abril, 1977) y del ex-Presidente Lleras Restrepo (El Espectador, 21 de Abril, 1977).

- (56) Lo cual, por otra parte, se aseguró mediante la desviación de las sesiones extras hacia la defensa del presidente, mediante el ridículo papel del Gabinete en pleno en el recinto del Congreso, mediante la irregular producción del Informe de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, mediante las bur-las públicas que los periodistas Lucas y Eduardo Caballero hicieron de la imparcialidad del Parlamento, mediante la coincidencia de los viajes turís-ticos de representantes y senadores con el desgaste de la moralidad presi-dencial, etc.
- (57) Editorial de El Tiempo, 13 de Abril, 1977. La cita inicial es del presiden-te López Michelsen. El subrayado es nuestro, F.R.
- (58) Editorial de El Tiempo, 22 de Abril, 1977. El subrayado es nuestro, F.R. Igualmente diáfanos son los editoriales del mismo periódico del 1o. y 18 de Abril y 5 de Mayo, 1977.
- (59) El Espectador, 1 - 9 de Febrero, 1977.
- (60) Los anuncios de Lleras Restrepo sobre una transición explícita hacia la So-cial-Democracia se encuentran en El Espectador, 2 de Abril, 1977.
- (61) Las propuestas alvaristas constan en numerosos editoriales de su máximo dirigente en el diario El Siglo.
- (62) Esta parece ser la mejor abstracción que puede hacerse de la kilométrica plataforma turbayista en lo que respecta a la crisis del bloque (ver el texto del discurso de aceptación de la candidatura pronunciado por Turbay Aya-la en El Tiempo, 8 de Mayo, 1977).
- (63) El Espectador, 15 de Abril, 1977.

3. LAS SALIDAS INSTITUCIONALES DEL BLOQUE

En este capítulo se discutirán las principales soluciones posibles a la encrucijada en que se encuentra el régimen. Únicamente se hablará de las vías institucionales de resolución. Esto es, de los caminos para restablecer la armonía de las clases dominantes y fortalecer el imperio de la dominación sobre las masas populares mediante reajustes en los aparatos estatales y en los partidos burgueses. No se tocarán los desenlaces de la crisis de hegemonía propiamente dicha por cuanto, al parecer, ésta sólo se irá resolviendo en el largo plazo.

Ahora bien, las respuestas institucionales (que son también políticas) están condicionadas por la naturaleza misma del embrollo que, según lo expuesto en el Capítulo anterior:

- a) No se trata de una crisis determinada por una alianza anti-monopolista de las clases populares, la pequeña burguesía y el capital competitivo que se habrían enfrentado al Ejecutivo como lugar de concentración que es de la hegemonía monopolista. Aquí es necesario resaltar que, si bien la Asociación de Pequeños Industriales ha participado de las críticas a la falta de incentivos a la producción interna, el liderazgo gremial del movimiento anti-gobiernista ha estado a cargo de los sectores monopolistas y oligopolistas (ANDI, FEDEMETAL, ACOPLASTICOS, ANALDEX, SAC, CAMACOL, etc) que están disputando su posición hegemónica al interior del bloque. Es decir, que las bases materiales de la crisis de los últimos meses están en el mismo capital monopolista y NO DAN LUGAR A PLANTEAR UNA ALIAN-

ZA POPULAR ANTIMONOPOLISTA. Las luchas de las clases trabajadoras y los enfrentamientos entre las fracciones del capital son **PARALELAS** y no se tocan, desde el punto de vista de las alianzas de clase, aunque **COINCIDEN EN EL TIEMPO** y unas y otras gravitan sobre la estabilidad del presidente, del gobierno y de las mismas instituciones democrático-burguesas;

b) No obstante las contradicciones entre las distintas fracciones del capital, todas ellas pretenden defender la unidad nacional y restablecer la organización del bloque, ya sea atacando o defendiendo al presidente y al gobierno. Esta idea nacionalista no es, sin embargo, la de los intereses de independencia de las clases nacionales sino la de fidelidad y sujeción al sistema general de dominación, con supresión de los objetivos de clase en favor de unos intereses supuestamente más amplios que serían los intereses de la estabilidad social. Hasta el punto de que ese nacionalismo resulta perfectamente compatible con los llamamientos a un comportamiento más autóctono, es decir, menos intercolonialista y menos proletario, de las clases trabajadoras (1).

Por otra parte, los posibles recursos del bloque deben enmarcarse dentro de lo que parece será el devenir inmediato de las relaciones políticas. Concretamente:

a) Todo parece indicar que continuará la tendencia a las acusaciones y a la auto-destrucción del sector político hasta las vísperas de la contienda electoral. Pero, paralelamente, puede esperarse una vigorización del debate estratégico entre las corrientes partidistas y unas actuaciones más moderadas y más conciliadoras de parte de algunas de ellas (2).

b) Asimismo, parecería que el gobierno de López no altera-

rá sus políticas de abandono relativo a la producción y de protección de los intereses de los cafeteros;

- c) Finalmente, se cree que las luchas populares y guerrilleras urbanas continuarán su ascenso relativo y que el segundo semestre de este año conocerá algún grado de agitación obrera más o menos masiva y más o menos espontánea contra el alza en el costo de la vida, que podría articularse alrededor de los movimientos de maestros y de médicos(3). El gobierno, por su parte, reaccionará, seguramente, convocando al Consejo Nacional de Salarios, elevando el salario mínimo y haciendo gran despliegue del restablecimiento de la concertación obrero-patronal tutelada por el Ejecutivo(4).

Sobre estas premisas, pueden concebirse las siguientes contestaciones del bloque:

1. VARIACIONES EN LA POLITICA ECONOMICA

En primer lugar, López podría intentar la introducción de políticas de incentivos y de estímulos a la producción nacional y la ordenación de reducciones marginales en las ganancias de los exportadores de café. Es decir, podría disponer algunos paliativos que atenuaran la crisis interna del bloque, seguramente mediante la sustitución del Ministro de Hacienda lo que, además, serviría para corroborar la idea de la naturaleza simplemente técnica de las divergencias puesto que se convertiría en una cuestión de preferencias teóricas de los ministros: Habría ministros inclinados por la contracción monetaria y habría ministros aficionados a la manipulación de la oferta de bienes y servicios.

Esta solución, no obstante, ofrece dificultades y parece insuficiente:

- a) No es enteramente fácil para el presidente justificar un

viraje sustancial en la columna vertebral de su política económica sin reconocer en ello su debilidad ante los gremios de la producción, cosa que no es compatible con la neutralidad soberana de los Jefes de Estado ni parece conveniente en momentos en que se está cuestionando precisamente la capacidad de liderazgo del Ejecutivo;

- b) La alteración de la política económica resultaría de todas formas insuficiente: No podría ser de tal magnitud que produjera más inestabilidad entre las fracciones del capital ni alcanzaría a irrigar suficientes ventajas para el capital manufacturero en lo que resta del cuatrienio López;
- c) Este camino dejaría intacta la crisis de la clase política que, como se vió, ejerce su propia autonomía.

Esta vía podría, sin embargo, revestir dos modalidades que contribuirían a salvar la figura del presidente y a llamar a la reorganización de la clase política en torno a la protección de las instituciones:

- a) Implementándola a través de una emergencia económica, tal como lo ha propuesto el ex-ministro Antonio Alvarez Restrepo (5). De esta manera, la amenaza de una crisis nacional legitimaría toda reorientación política, tal como ocurrió con la emergencia económica decretada por López en el 74;
- b) Presentándola bajo la cobertura de un nuevo lapso de concertación obrero-patronal impulsado por el gobierno con el objetivo de unir un gran bloque anti-inflacionario. Así se llamaría a la solidaridad nacional y se reforzaría la figuración técnica del problema.

A pesar de sus ventajas, estas dos representaciones también

presentan riesgos e insuficiencias: No se ve como lograrían borrar completamente la faceta derrotista de un presidente que, por haberse comprometido reiteradamente con unas posiciones, se encuentra hoy encerrado dentro de la rigidez de su compromiso. Además, la estrategia de la concertación podría propiciar la constitución de un foro adicional donde se ventilan públicamente y se agudizan los enfrentamientos entre las fracciones del capital.

2. LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE

Esta es la ruta diseñada por el ospino-pastranismo (6); también fue contemplada momentáneamente por El Espectador. Aunque la primera corriente tiene obvias razones partidistas para impulsar esta solución, la posición más “objetiva” del diario liberal indica que podría constituir una buena estrategia para robustecer las instituciones vigentes. Y las razones saltan a la vista: Se rehabilitaría el símbolo presidencial, se propiciaría la reconstrucción del sector político, se tonificarían los principios de igualdad ante la ley y de generalidad de la administración de justicia (lo que no va sin consecuencias para la subordinación de las clases trabajadoras) y, por último, se ensancharía el campo de corrección de la política económica.

Pero, ya son muy grandes las expectativas electorales fundadas en la permanencia de López en la presidencia y a ellas están ligadas las mayorías parlamentarias. Esta *circunstancia* crea una nueva rigidez en la estructura institucional. Además, el Designado a la Presidencia se ha encargado de clausurar, él mismo, la posibilidad de variar la política económica lopista puesto que, sin tener que ver con ello, se ha identificado plenamente con “el liberalismo del último cuarto del Siglo XX” defendido por el presidente. Finalmente, el traspaso del mando, en las actuales condiciones de des-

composición del sector político, puede no detenerse en el ascenso del Designado sino que, al calor del momento, podría ir hasta la destrucción de las instituciones democráticas.

3. INTENSIFICAR LA REPRESION DEL CRIMEN Y DE LAS ORGANIZACIONES SUBERSIVAS

Tanto el diario *El Siglo* como los militares vienen apoyando esta orientación. Y López obtendría múltiples provechos de una decisión en este sentido, ya fuera aislada o combinada con alguna de sus otras alternativas: tranquilizaría un tanto las inquietudes de los militares debidas a la inestabilidad general y convocaría implícita o explícitamente a la adhesión nacional contra un enemigo común. De hecho, este es uno de los temas propuestos por López para la consideración de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, planteado de manera aislada, no alcanza a opacar los otros determinantes y las otras manifestaciones de la crisis de estabilidad.

4. LA REFORMA ELECTORAL

Por momentos se pretendió emplear la oportunidad de la reforma electoral para vigorizar los partidos burgueses e impedir que degeneraran en la infecundidad actual. Sin embargo, tal como ha sido aprobada la reforma en el Congreso, sus alcances quedaron notoriamente restringidos, hasta el punto de que no puede jugar ningún papel en las vicisitudes actuales: se limitó a absorber a la izquierda dentro del juego electoral y a realzar la idea de la representatividad popular mediante la introducción de controles y garantías de pureza al sufragio (7).

5. LA ENMIENDA DE LA CARTA POR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

El proyecto de reforma a la Constitución Nacional mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente fue ideado por López con anterioridad a la aglomeración de factores que están determinando la presente crisis. Sin embargo, el presidente sigue pensando en la Constituyente como madero de salvación de las instituciones democráticas.

“... yo creo que el futuro del país depende de que haya o no Asamblea Constitucional. Y no es porque eso sea idea mía. Si hay Asamblea Constituyente y si el país reorganiza sobre bases de mayor orden y disciplina, sobre el principio de lo que yo he llamado ‘la institucionalización’, yo creo que hay una razonable posibilidad de que hasta el año 2000 llegemos con democracia” (8).

Los dos objetivos explícitos de la proyectada reforma son la reestructuración del aparato judicial y de sus procedimientos y la definición de las relaciones fiscales entre la Nación, los departamentos y los municipios. Sin embargo, cuando se trasciende el nominalismo y la exégesis es posible dar cuenta del significado político de los proyectos. Lo cual, por otra parte, se facilita, en este caso, por el desabrimiento del mismo López y de algunos otros directivos políticos que no se han esmerado en ocultar el carácter de clase que alcanzaría la propuesta gubernamental. Así, aparecen nítidamente las siguientes intenciones:

- a) Restaurar la credibilidad y la eficiencia de la administración de justicia penal para controlar tanto el ascenso de las luchas criminales comunes como las organizaciones guerrilleras urbanas (9);

- b) Prevenir el desbordamiento de las luchas específicamente urbanas (luchas por los servicios públicos, por la tierra, contra la estratificación de la urbe, etc.) y garantizar la contribución del Estado en la disminución de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo, particularmente en lo que respecta a los servicios municipales y a otras funciones parcialmente descentralizadas como salud y educación(10);
- c) Restar toda importancia a un nivel administrativo, el departamental, que por razón del desarrollo desigual de las regiones suele constituir un fortín de clases precapitalistas o, en todo caso, no monopolistas (11). Por el contrario, robustecer los fiscos municipales, pero hacerlo bajo los principios de la capacidad individual y de la autonomía administrativa de cada municipio en el manejo de sus fondos (12). Estos dos principios, resulta notorio, están destinados a garantizar la operatividad de los servicios públicos en las grandes urbes donde se concentran la producción, la distribución y el consumo. Lo que significa que bajo la pantalla de una mayor descentralización y de un ensanchamiento de la autonomía regional se encubre la extensión de los principios de racionalidad propios del capital monopolista y se asegura su eficaz desarrollo.

Las anteriores reformas requieren de un acuerdo fundamental del bloque (y, como tal, deben plasmarse en la Constitución) y del consentimiento indirecto de los sectores partidistas y parlamentarios. En primer lugar, porque los reajustes en las finanzas públicas y en los servicios a cargo del Estado conllevan un traslado de plusvalía social hacia el erario público, traslado cuyo impacto sobre la acumulación del capital depende de la destinación del gasto público y de la relativa eficiencia de su aplicación. En segundo lugar, porque la readecuación de la administración de justicia puede implicar violaciones a los pilares de la libertad y de las garantías

sociales sobre las cuales se erigen toda la ideología constitucional y penal vigentes. Finalmente, por cuanto la reestructuración de departamentos y municipios alterará la composición de la clase política y ocasionará un remozamiento de la misma, más acorde con el funcionamiento parlamentario y burocrático del Estado capitalista en el estadio monopolista.

Ahora bien, no se le escapa al gobierno que el proyecto de Asamblea Constituyente brinda algunos escapes a la presente crisis:

- a) Por cuanto sus perspectivas apaciguan un tanto el desasosiego militar por las olas delictivas y subversivas que se han extendido a todos los niveles de la sociedad;
- b) Por cuanto, **efectivamente**, se trata de un instrumento para subordinar las más diversas manifestaciones de las luchas populares urbanas;
- c) Por cuanto la refinación de la participación pública en los costos de reproducción de la fuerza de trabajo produce un beneficio general para el capital que, como tal, irriga también las arcas del capital productivo;
- d) En fin, por cuanto constituye un programa para los partidos políticos, carentes momentáneamente de plataformas sustantivas que los ocupen y que les permitan diseñar y plantear estrategias de coordinación y avance de las clases dominantes. Además, como seguramente los proyectos amenazarán algunas de las libertades constitucionales, entretemdrán también a la mayoría de los partidos de izquierda que saldrán a la defensa de la legalidad burguesa normal, tal como ya lo ha venido haciendo el Partido Comunista (13).

Pero, a pesar de sus atractivos como solución a la crisis actual, la reforma constitucional había sido concebida como un instrumento para prevenir orgánicamente las crisis políticas en el largo plazo. De allí sus limitaciones frente a las particularidades de la presente inestabilidad: En primer lugar por cuanto no ofrece salidas inmediatas y, en segundo lugar, porque no toca con la intervención del Estado en las condiciones materiales generales de la producción (infraestructura, producción pública de ciertos insumos, atención estatal de empresas riesgosas o de tasas de ganancia inferiores a la media, ofrecimiento de subsidios e incentivos a las empresas que eleven su composición orgánica de capital, etc.), que es precisamente lo que vienen exigiendo los sectores manufactureros. Y esta exigencia no resulta solamente del conflicto entre las fracciones del capital, que lleva a la industria a reclamar tasas de ganancia iguales a las de los otros sectores y protección frente a la competencia internacional sino también de la agudización de las crisis del capital en el estadio monopolista, tanto en la amplitud como en la frecuencia de estas crisis. Es decir, que el capital localizado en cada país requiere que el Estado atenúe la tendencia a la baja en la tasa de ganancia y los ciclos recesivos del capital, ya sea menguando los crecientes costos de capital constante o aminorando los gastos salariales y prestacionales.

6. LA VIA ELECTORAL

La proximidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias hace que ellas ofrezcan otra solución a la crisis del bloque y a la crisis del Estado y de los partidos políticos. Además, la vía electoral no excluye ninguno de los caminos anteriores sino que, por el contrario, se combina perfectamente con todos o algunos de ellos. En realidad, puede

anticiparse, la oportunidad de las elecciones, con todo lo que ellas acarrearán, parece ser el principal y el más probable sendero de solución asequible al bloque en este momento. Su único obstáculo sería una repentina dilatación cualitativa de la crisis que operara antes de que el clima de plataformas partidistas de solución y de movilización popular relegue las dudas sobre la capacidad y sobre la moralidad del actual gobierno a un segundo plano y arrastre a las masas populares a los cauces engañosos de la votación.

Múltiples son los encantos de los comicios electorales:

a) Las proyectadas elecciones de Febrero y las decretadas elecciones de Abril vienen movilizando a los partidos y agitarán sus planteamientos ideológicos (es decir, estratégicos), especialmente en el segundo semestre de este año y en los primeros meses del siguiente. Esta reactivación de la cordura partidista y de los intelectuales de la burguesía está brotando y manará aún más en momentos en que todavía el cretinismo de la clase política no ha llegado al extremo de propiciar un rompimiento entre las clases dominantes y sus representantes partidistas. Es decir, todo parece indicar que, por razón de la proximidad de las elecciones, no se llegará a una crisis de representación de los partidos y, lo que es apenas una consecuencia, no se favorecerá el desarrollo de una mayor autonomía del Estado que generalmente acompaña a esta crisis. Advirtiendo que, en los momentos actuales de crisis simultánea del Ejecutivo y de los partidos, las reclamaciones de una mayor autonomía estatal estarían inclinando la balanza por una salida de excepción, posiblemente una dictadura militar;

b) Pero, además de paliar la crisis de los partidos, las elecciones presidenciales determinan por sí mismas un plazo, relativamente corto, para restablecer el liderazgo del Jefe del

Estado. En otras palabras, la convocatoria a elecciones permite personificar la causa del malestar actual y abrir un compás de espera en tanto se produce el relevo presidencial (14);

c) Además, el concurso por las curules parlamentarias permitirá una renovación parcial de los representantes. Cabe entonces la esperanza de que los nuevos representantes sean mejores agentes de la ideología monopolista y de que, consecuentemente, vayan operando el tránsito hacia la hegemonía del capital monopolista dentro del parlamento. Tal es, ciertamente, el significado político de las banderas que vienen agitando el llerismo y -aunque en menor medida- el agudelismo, cuando hablan de la necesidad de llevar técnicos a los cuerpos colegiados y de sus expectativas de un remozamiento de la clase política (15);

d) También, la sustitución de las personalidades de la Administración Pública alimenta la ilusión de una reconstrucción de la armonía en el interior del bloque, principalmente mediante un mayor reconocimiento de los intereses del capital productivo interno. Las experiencias con los candidatos y sus programas indican que tanto Lleras Restrepo, como Belisario, como Agudelo Villa y, eventualmente, como Gómez Hurtado, todos ellos impulsarían esta línea de acción;

e) Finalmente, el proyecto de separación de elecciones que actualmente hace curso en el Congreso redundaría, de ser aprobado, en nuevos beneficios para el esquema político dominante: De una parte, la competencia entre las diversas corrientes en las "primarias" de Febrero estimularía el caudal de electores y reduciría la abstención. De otra parte, los electores de la izquierda, ampliamente derrotados en las primeras elecciones, difícilmente encontrarían estímulos para "perder" su voto por un candidato presidencial que no alcanzará mayor figuración.

Pero todas las mercedes de la vía electoral se encuentran restringidas por razón del condicionamiento al resultado de la elección. Y esto por cuanto el candidato favorito en el momento actual, Turbay Ayala, desvirtúa los atractivos que el camino electoral ofrece al bloque. Así, la asociación de la personalidad política de Turbay con la carencia de ideas y de proposiciones teóricas, con el manzanillismo político, con el burocratismo, con el manejo irregular de los fondos públicos, con la ausencia de programas, con el desconocimiento de "la economía", con la clase política tradicional, con las políticas económicas y laborales lopistas, etc., refrenaría el impacto integrador del momento electoral y, como se comenta popularmente, podría hacer de las elecciones una solución meramente transitoria que acabaría por reproducir la crisis actual solo que en un plano más elevado. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que las primeras ideas de la plataforma turbayista repiten explícitamente el abandono de corte lopista a la producción nacional.

7. EL CAMINO DE LA DICTADURA MILITAR

Ciertamente, el ambiente de descomposición política hace pensar frecuentemente en la posibilidad de un golpe militar en el corto plazo. Sin embargo, como queda dicho anteriormente, la tesis de este trabajo es que no se ha llegado a una coyuntura determinante de un golpe y que, quizás, no se llegará en el futuro inmediato. No se ha dado una ruptura entre los partidos y las clases dominantes ni el cretinismo parlamentario ha llevado al Congreso a la inoperancia ni la ascendencia moral técnica e imparcial del Jefe del Estado ha sido completamente desvirtuada. Además, los movimientos populares no han llegado a amenazar la estabilidad del régimen de dominación política.

Pero, la circunstancia de que esta salida parezca improbable no significa que su posibilidad, por sí misma, no esté pesando en las decisiones actuales ni que se justifique dejar de lado la consideración de sus halagos e inconvenientes para el conjunto de clases dominantes.

En primer lugar, hay que reconocer que el fantasma militar puede forzar al presidente a adoptar medidas atentatorias de las libertades individuales, encaminadas a revivir la imagen del orden y a superar el clima de confusión y desorden. Ya se había mencionado el caso de la Universidad Nacional. Pero, lo mismo podría ocurrir con la libertad de prensa o con otras libertades. Lo que no significa que la libertad de prensa sea atentatoria contra el sistema. Por el contrario, el juego a la tolerancia de toda suerte de matices periodísticos y políticos sirve para legitimar la ideología libertaria y permite que la prensa "independiente" desempeñe de manera más sutil y velada su papel de perro guardián de la ideología dominante. Aún los acalorados y a veces "radicales" vespertinos, cuya irreverencia populista y sus maneras bastardas sólo ocultan la vacuidad de su análisis, contribuyen a infundir los cimientos de la justificación capitalista. Lo que se quiere enfatizar es que, en momentos de inestabilidad, la ideología militar, adoradora del orden y de la unidad nacional, respalda y exige procedimientos excepcionales.

Pero, en condiciones "normales", la unidad nacional se identifica con el imperio del derecho y el respeto a la legalidad a la generalidad y a la neutralidad del Estado. De allí que las posibilidades represivas del gobierno de López no puedan ser utilizadas en su propio provecho, tal como ocurriría si López restringiera la libertad de prensa o se apoderara de los medios de comunicación para acallar las críticas contra su ética personal (16). Tal es el riesgo de las indirectas sancio-

nes de López a algunos periodistas que han cuestionado públicamente su moralidad y del grotesco control que en provecho propio y de su lacayo de turno, el candidato Turbay, impuso sobre algunos de los noticieros de la televisión nacional. Es que, en las formaciones capitalistas "normales", la prensa puede ser abiertamente partidista pero no ocurre lo mismo con la radio y menos aún con la televisión. Por el contrario, el control de los aparatos ideológicos de Estado por parte del Ejecutivo debe hacerse bajo la cobertura falaz de la neutralidad y la objetividad.

En segundo lugar, hay que advertir que la contención del desbordamiento caótico del sector político no constituye el único aliciente para la implantación de una dictadura militar. Porque, además, puede pensarse que el espíritu "modernista" de la mayor parte de las dictaduras latinoamericanas, de repetirse en Colombia este patrón general, afectaría seguramente los intereses de los intermediarios cafeteros (quizás mediante la nacionalización del mercadeo exterior del grano, tal como han sugerido Agudelo Villa y ANIF) y vincularía activamente al Estado al apoyo de la producción interna, en asocio con los monopolios internacionales. Es decir, que la mayoría de las soluciones militares implica, en lo que se refiere a las contradicciones internas del bloque, la destrucción de la reproducción nacional atrasada, la subordinación de la burguesía compradora y la hegemonía del capital monopolista avanzado, generalmente de carácter extranjero. Y esta sería una forma de resolver la crisis de hegemonía actual.

Por último, hay que recalcar que el capital no es indiferente en cuanto a la elección entre las formas democrático-burguesas y los regímenes políticos de excepción. Y esto por cuanto la forma específica como se oculta la extorsión en el modo de producción capitalista exige la vigencia de las apa-

riencias de libertad individual, para contratar y, a su vez, esta libertad individual se aviene mejor con los principios del contrato social y con las instituciones democráticas. La supresión de los símbolos de participación y de soberanía populares no va, pues, sin costos, para el conjunto del sistema de dominación. Además, las distintas fracciones del capital temen al ejercicio de la mayor autonomía relativa de que gozan las fuerzas militares en los gobiernos dictatoriales. Este mayor grado de independencia frente a los intereses particulares de cada una de ellas, que se manifiesta por la concentración del poder en determinados aparatos del Estado, puede conducir a la consagración absoluta de la hegemonía de una o más fracciones con exclusión y subordinación de las otras que venían disputando las posiciones hegemónicas.

NOTAS

- (1) Llamamientos que frecuentemente formulan los partidos políticos en su intento por desorganizar a las clases populares. La última de tales apelaciones se presentó con ocasión de la celebración obrera del 1o. de Mayo de este año (Editorial de El Siglo, 3 de Mayo, 1977).
- (2) Es lo que se viene viendo ya en los llamamientos a la cordura y a la lealtad de parte de dirigentes y candidatos tales como Belisario Betancur, Lleras Restrepo, Agudelo Villa y el mismo Turbay Ayaia.
- (3) Además, el alza ya decretada en las tarifas de energía eléctrica para Bogotá, más las que se anuncian en la gasolina, podrán exaltar los ánimos populares en las grandes urbes.
- (4) Se trata de una salida tolerada por el capital monopolista y aún benéfica para éste (Controversia, 50-51). Como tal, viene siendo, desde ya, promovida por ANDI y ANIF y respaldada por las centrales obreras patronales.
- (5) El Espectador, 26 de Abril, 1977.
- (6) Ver, por ejemplo, El Espectador, 24 de Abril, 1977.
- (7) Sobre las limitaciones de la reforma, ver los artículos de L. Villar Borda en El Espectador, 30 de Abril y 1o. de Mayo, 1977.
Pero, no solamente no contribuyó a la activación de los partidos sino que la forma irregular como fue aprobada arrojó nuevas dudas sobre el Congreso y alentó nuevas divisiones partidistas (ver, por ejemplo, las declaraciones de Apolinar Díaz C. en El Tiempo, 26 de Abril, 1977 y el rechazo de los conservadores unionistas en El Tiempo, 29 de Abril, 1977).
De allí que tan pronto como fue aprobada se hubieran propuesto contra-reformas destinadas a ampliar sus perspectivas y a legitimar el proyecto adoptado en las sesiones extras del primer semestre de este año (ver las explicaciones de H. Escobar Sierra en El Tiempo, 26 de Abril, 1977).
- (8) LOPEZ MICHELSEN, A. Reportaje a Causa Común en El Tiempo, 10 de Abril, 1977.
- (9) Una síntesis de las propuestas gubernamentales y partidistas, además de una breve exposición de los temores que abrigan las clases dominantes sobre esta materia, se encuentra en Controversia, Nos. 50-51, pp. 166 ss. También en ROJAS, F. Criminalidad y Constituyente, Bogotá, Cinep, 1977.

- (10) Una explicación sintética de las ventajas que deriva el capital de la participación estatal en estos servicios y de la crisis de los mismos en Colombia se encuentra en *Controversia*, Nos. 50-51, pp. 161 ss.
- (11) De allí las permanentes acusaciones al burocratismo, el derroche y la irracionalidad del gasto departamental, secundados hoy por la Contraloría General de la República (ver, por ejemplo, *El Tiempo*, 23 de Diciembre, 1976).
- (12) El pensamiento más claro de López sobre este tema se encuentra en su prólogo al libro de Carlos Restrepo Piedrahíta, "25 años de evolución político-constitucional 1950-1975", prólogo publicado en *El Tiempo*, 28 de Noviembre y 4 de Diciembre, 1976.
- (13) *Estudios Marxistas*, 11, 1976; *Documentos Políticos*, 121, Septiembre-Octubre, 1976.
- (14) De allí que Lleras Restrepo y Belisario Betancur pretendan, ambos, colocarse por encima de la miopía partidista y del clima acusatorio mientras que, simultáneamente censuran, de manera alegórica y altisonante la corrupción imperante (ver, por ejemplo, *El Espectador*, 15 de Mayo, 1977).
- (15) Ver, por ejemplo, las declaraciones de Lleras Restrepo en *El Tiempo*, 17 de Abril, 1977, sobre la renovación y transformación de la clase política.
- (16) De allí también que resulte legítimo apelar al golpe militar so pretexto del deterioro e incapacidad de la personalidad del presidente, tal como viene haciendo el diario *La República* sin que sea dado al presidente silenciar a sus detractores. (Ver, por ejemplo, los editoriales de Bertha de Ospina en *La República*, 3 y 5 de Mayo, 1977).

4. LAS POSIBILIDADES DE LOS MOVIMIENTOS POPULARES

APROVECHAR LAS FLAQUEZAS DEL REGIMEN DE DOMINACION

Todo el sistema de fetichización capitalista atraviesa, coyunturalmente en nuestro país, por un período de languidez y raquitismo. Y aún las estrategias para restablecer la dominación y la ocultación (que son inseparables) están, hasta cierto punto, limitadas:

- 1) Las apariencias justificativas de la unidad nacional se han venido desquebrajando; viven, transitoriamente, una etapa de inanición. La incapacidad política del Ejecutivo, el Legislativo y los partidos; las mutuas imputaciones de las capas capitalistas sobre responsabilidad en la crisis actual; las manifiestas y toleradas violaciones de las reglas capitalistas de acumulación por parte del crimen organizado; la impotencia de los métodos de prevención y represión ante el crimen cotidiano de los desempleados; el resurgimiento guerrillero urbano y rural, etc., son evidencias sintomáticas de la existencia de un virus oculto que, expresado comprensivamente, puede catalogarse de anemia de la hegemonía cultural del capital. **Simultáneamente** todos estos fenómenos manifiestan una inanición momentánea del sistema mismo de dominación considerado en su conjunto (y ya no solamente desde el punto de vista de la mitificación de su carácter de clase);
- 2) Al mismo tiempo, el deterioro considerable de los salarios en la primera mitad de este año contraviene otro fetiche, esta vez esencial al modo de producción capitalista. Es la idea de "el salario justo" o "el salario equivalente" la

que se deslustra en períodos de inflación galopante. No que la lucha contra el menoscabo salarial originado en la inflación combata la figura del salario y, por ende, descubra el artificio mistificador de la explotación. Lo que se quiere mostrar es que la ocasión de agudeza inflacionaria desvirtúa, por sí misma, toda la lucha reivindicativa, puesto que desvanece las conquistas salariales de muchos años, y, por este camino, ilustra la insuficiencia de la lucha obrera cuando ésta parte del supuesto de la equidad salarial;

3) Además, el menoscabo de los salarios reales crea un ambiente de malestar propicio para la insurrección obrera hasta el punto de que los levantamientos de las bases pueden llegar a desbordar la apatía que de su aburguesamiento y los canales institucionales que les plantean las directivas de las centrales obreras y aún algunos partidos de izquierda. Así ha ocurrido anteriormente y las centrales patronales han tenido que acceder a las presiones sindicales.

Con todo, hay que reconocer que el factor tiempo está de parte del capital. Las asociaciones de trabajadores se encuentran en proceso de desorganización y reflujos actualmente, cuando los índices de alzas en el costo de la vida alcanzarán sus máximos guarismos. Es predecible que las tasas inflacionarias disminuyan en el segundo semestre y que, por tanto, la posible ofensiva obrera choque contra los argumentos del sometimiento de la inflación y contra la distracción electoral;

4) Por último, la debilidad e inestabilidad del gobierno actual engendran también posibilidades más amplias para los movimientos reivindicativos y revolucionarios. Precisamente por razón del apocamiento del Ejecutivo en estos meses la combatividad obrera ejercerá una influencia decisiva sobre la forma como finalmente se resuelva la crisis. Según

que las organizaciones de trabajadores se sitúen más o menos a la ofensiva atenuarán o precipitarán la crisis del gobierno. De allí que ya comiencen a oírse voces atemorizadas, encabezadas por las mismas centrales obreras, que aconsejan cerrar filas al lado del presidente con miras a prevenir la implantación de un régimen de excepción que, supuestamente, restringiría los canales de la lucha reivindicativa institucional.

Nada podía ser más equivocado. En primer lugar, porque solamente unos alzamientos inmediatos y generalizados pueden aprovechar el agotamiento del Estado actual y sólo así puede extraerse todos los beneficios reivindicativos y organizacionales a que la crisis da lugar. La pasividad y, peor aún, el respaldo al gobierno, significan desperdiciar la coyuntura y desorganizar más a las clases trabajadoras. Y esto, de paso sea dicho, independientemente de la salida política final la cual, en todo caso, no depende del libre arbitrio del bloque sino que estará determinada por el balance general de la lucha de clases. En segundo lugar, porque el retroceso ante la amenaza de una forma aparentemente más autoritaria del Estado implica condicionar las estrategias y las metas del movimiento obrero a las formas del Estado. Esa amenaza se cierne permanentemente sobre las clases populares, claro está; pero la explotación no reside en la forma del Estado capitalista sino en la existencia misma del capital y, en consecuencia, no corresponde a las clases trabajadoras supeditar sus lides al apoyo gubernamental ni auto-restringir sus luchas a las expresiones de clase que no espantan las formas democrático-burguesas de dominación. En tercer lugar, por cuanto el régimen militar que, a propósito, no constituye la solución preferida del bloque en este momento, presenta también riesgos y costos para el capital. En las páginas anteriores se hizo referencia a las desventajas más generales de las dictaduras para la armonización de las fracciones dominantes y para la ocultación de la extorsión. Pero, además,

puede señalarse el peligro, para el capital, de una "sortie a gauche" de un golpe de Estado, tal como ocurrió en los primeros meses de la coalición gobiernista que puso fin al régimen de Caetano en Portugal. No que esta sea la orientación más probable de un régimen de excepción en la formación colombiana actual ni que los Estados cesaristas estén por encima de la confrontación entre las clases, sino que la mayor autonomía de que gozan las dictaduras militares y el carácter reservado de sus procedimientos hacen un tanto impredecibles sus decisiones. Finalmente, porque las experiencias revolucionarias dejan más lecciones que cientos de años de elaboración teórica y de conflictos simplemente economicistas.

Hay pues, ahora y en el corto plazo, un conjunto de flaquezas en toda la estructura de dominación, particularmente en los aspectos predominantes ideológicos de la misma. Lo que no significa que la hegemonía cultural burguesa haya desaparecido ni que las masas hayan pasado a mirar críticamente todo el andamiaje justificativo de la imposición capitalista. Por el contrario, es ahora cuando comienza a florecer la contra-ofensiva del capital, a través de sus partidos, de sus representantes y de sus intelectuales, lo que puede conducir finalmente a un fortalecimiento de la extorsión y del Estado capitalistas. Esa es la disyuntiva política que está en juego en la presente crisis. Sólo los hechos sociales, es decir de clase, determinarán, a la postre, el camino a seguir.